

Cátedra Facultad de Periodismo y Comunicación Social Cuaderno de Periodismo y Comunicación Social Cuaderno de Periodismo y Comunicación Social Cuaderno de Periodismo y Comunicación Social Cuaderno de Periodismo y Comunicación Social

Cuaderno de cátedra

HISTORIA DE LOS PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA CÁTEDRA I



Secretaría de Asuntos Académicos
Dirección de Cuadernos de Cátedra



FACULTAD DE PERIODISMO
Y COMUNICACION SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Ediciones **EPC**
de Periodismo y Comunicación

Ciappina, Carlos M.

Historia de los procesos políticos y sociales de América Latina / Carlos M. Ciappina. - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 2018.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-34-1730-0

1. Historia. 2. América Latina. 3. Política . I. Título.

CDD 320.0980

Decana:

Andrea Varela

Vicedecano:

Pablo Bilyk

Jefe de Gabinete:

Martín González Frígoli

Secretaria de Asuntos Académicos:

Ayelen Sidun

Secretaria de Investigaciones Científicas:

Daiana Bruzzone

Secretaría de Posgrado:

Lía Gómez

Secretario de Extensión:

Agustín Martinuzzi

Secretario de Derechos Humanos:

Jorge Jaunarena

Secretario Administrativo:

Federico Varela

Secretaría de Finanzas:

Marisol Cammertoni

Secretaria de Género:

Flavia Delmas

Índice:

Introducción: página 1.

Las independencias hispanoamericanas, por Leandro García: página 2.

México en 1910: hacia una revolución social, por María Teresita Bonet: página 17.

Las experiencias populistas en América Latina (1930-1960), por Carlos Ciappina:
página 36.

Los movimientos sociales en la Argentina: de los noventa a la actualidad, por Saúl Casas: página 61.

Resistencias al neoliberalismo en América Latina: Estados y recuperación económica en el siglo XXI, por Carlos Ciappina: página 84.

América Latina y los procesos de integración en el siglo XXI ¿Integración para la inclusión o para el saqueo?, por Fernando Esteche: página 107.

Introducción

Este Cuaderno de Cátedra –enmarcado en la renovación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social, aprobada en el año 2014– se propone ser un aporte para la lectura y discusión críticas de los principales procesos sociopolíticos en la América Latina contemporánea.

El recorrido se inicia con un análisis de los procesos emancipadores latinoamericanos, un segundo momento dedicado a la Revolución mexicana como crisis del modelo oligárquico del siglo XIX, un tercer capítulo que analiza los rasgos centrales y los debates sobre el populismo o los gobiernos nacional-populares latinoamericanos, un cuarto capítulo referido a los movimientos sociales en América Latina, con especial énfasis en el caso Argentino, un quinto capítulo sobre el impacto de las políticas neoliberales y su relación con el Estado, y una retrospectiva final sobre los procesos de integración latinoamericana de las últimas décadas.

Miembros de la cátedra

Titular: Dr. Carlos Ciappina.

Adjuntos: Dra. Teresita Bonet y Dr. Saúl Casas.

Jefes de Trabajos Prácticos: Magister Yamila Kiriacópulos y Magister Leandro García.

Ayudantes diplomados: Lic. Gregorio Dolce Battistessa y Dr. Fernando Esteche.

Las independencias hispanoamericanas

Por Leandro García

Existen varias formas de abordar los complejos procesos de independencia latinoamericanos. Sin embargo, tal vez siga siendo válido interrogarse sobre las causas por las cuales un imperio que había logrado cierta estabilidad –no exenta de tensiones– durante poco más de tres siglos –desde el XVI hasta principios del XIX– se fragmentó en un período tan breve: el que abarca desde la caída de Fernando VII, en 1808, hasta la batalla de Ayacucho, en 1824.

Como afirma Fernando Mires (1989), este proceso tiene múltiples direcciones contrapuestas.

Las reformas borbónicas

Mientras en Inglaterra se está produciendo un cambio revolucionario en la forma de producir bienes, iniciando un camino hacia la industrialización, España, con una economía fundamentalmente agraria y grandes dificultades para controlar su extenso territorio americano, está quedando relegada a una posición secundaria. La economía colonial depende de una metrópoli subdesarrollada.

Para salir del atraso, la dinastía de los Borbones, que gobierna el Imperio español desde principios del siglo XVIII, decide implementar una serie de reformas tanto en la península como en las colonias. Para esto, aumenta la explotación minera en América, convierte a estos territorios en consumidores de productos españoles e impide su desarrollo industrial.

A fin de incrementar los ingresos provenientes de las colonias, las medidas hacen hincapié en la recaudación de impuestos. Con este propósito se aumenta el control político por medio de la creación de nuevas unidades administrativas, lo que representa importantes cambios jurisdiccionales, como por ejemplo la creación de nuevos virreinos, capitanías e intendencias –evitando el nombramiento de criollos para ocupar cargos-. Otro sector que sufre las reformas borbónicas es la Iglesia católica, que en 1767 es expulsada de América, expropiándose a los jesuitas sus bienes. En líneas generales se podría afirmar que las reformas significaron un fortalecimiento económico del Estado y al mismo tiempo un perjuicio para algunos sectores privados. Un ejemplo se puede observar en la sanción del Reglamento de Libre Comercio de 1778, que fomentó la producción de algunos sectores de las colonias –como Buenos Aires con los cueros, Venezuela con el cacao y Cuba con el azúcar- y permitió la apertura de nuevos puertos. Sin embargo, las colonias sólo podían comerciar con España y no entre ellas, situación que reforzó el sistema monopolista y generó rivalidades entre regiones americanas (Lima contra el Río de la Plata, Chile contra Perú, Buenos Aires contra Montevideo, etcétera) que fueron beneficiadas o perjudicadas por las reformas.

El aumento de los impuestos perjudicó tanto a criollos como a sectores indígenas, provocando sublevaciones de distintas características que no necesariamente estuvieron coordinadas entre sí. Entre los movimientos más importantes se pueden mencionar los del Socorro en Nueva Granada (1781) y la sublevación de Tupac Amaru en Perú (1780). Estos conflictos demostraron que, cuando eran protagonizados por los vecinos importantes, las autoridades mostraban voluntad de negociación y en escasas oportunidades recurrían a la violencia. Totalmente distinta era la actitud cuando los

episodios eran liderados por las clases más bajas y las comunidades indígenas, que resultaban brutalmente reprimidas por el gobierno colonial.

Lo que también quedó claramente expuesto fue el comportamiento de los criollos, que en general optaron por no formar alianzas con los pueblos indígenas, prefiriendo la opresión española a los peligros de una revuelta social. Al mismo tiempo, si bien los movimientos criollos no tuvieron como objetivo la independencia, pueden haber contribuido, no sin grandes contradicciones, en la conformación de una identidad americana en contraposición a la española.

La Independencia de los Estados Unidos

En 1776, las trece colonias inglesas de América del Norte se emancipan y constituyen los Estados Unidos, transformándose en la primera experiencia independentista del continente. En este proceso cuentan con la ayuda de Francia y España, rivales de Inglaterra.

El régimen político que se instaura es el de una república. Si bien tiene como idea principal que los hombres nacen libres e iguales, se mantiene la vigencia de la esclavitud de la población de descendencia africana. Incluso su primer presidente, George Washington, es un terrateniente del estado sureño de Virginia propietario de esclavos. Por lo tanto, la revolución no modifica el orden social ni el económico.

El proceso independentista de las trece colonias inglesas ejerce una notable influencia en los futuros líderes revolucionarios latinoamericanos, que ven algunos aspectos de dicha experiencia como modelos de organización de los futuros países -por ejemplo, la

Constitución de los Estados Unidos, donde quedan expresadas las principales ideas del liberalismo-.

La influencia de la Revolución francesa en América Latina

En la Europa del siglo XVIII cobran vital importancia las ideas que proclaman la libertad individual, de expresión, de culto y el derecho de propiedad. Estos principios son representativos de los históricos anhelos de la burguesía, clase social que aspira a ser parte del gobierno, algo imposible bajo los parámetros de las monarquías absolutas. La difusión de estos nuevos valores está dada por el movimiento intelectual de la Ilustración, siendo uno de sus principales legados la influencia que tuvo en la Revolución francesa.

Entre las principales causas que explican el estallido de la revolución en Francia están la crisis económica, el desprestigio de la monarquía borbónica y los enormes privilegios que tenían la nobleza y el clero en relación con la mayor parte de la población. La Revolución francesa moviliza diversos actores políticos y sociales, con avances y retrocesos durante el proceso, genera violentas resistencias internas y externas entre quienes luchan por profundizar los cambios radicales y los sectores que se oponen, e incluso la fase más violenta enfrenta a los mismos grupos revolucionarios. La *Gran Revolución*, que puede extenderse desde 1789 hasta el fin de la etapa napoleónica, representa un gran legado que incluye la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la idea de la democracia, los códigos legales, la irrupción de vastos sectores de la población en la política, entre otros.

El proceso revolucionario haitiano

La Revolución repercute directamente en América Latina, especialmente en Saint-Domingue, Haití, con la discusión en torno a la esclavitud y la situación en las colonias francesas. Esta es la colonia más importante que Francia tiene en el Caribe (desde su separación de La Española), ya que su producción de azúcar compite con la inglesa, situación económicamente atractiva que produce afluencia de inmigración blanca y en mayor grado importación de esclavos negros de origen africano, quienes representan el 90% de la población.

Desde distintos sectores, en Francia se trabaja para que la población negra haitiana obtenga los derechos civiles y políticos que se están sancionando en el proceso revolucionario. Los reclamos tienen buena recepción en los sectores liberales, pero no en los dueños de las plantaciones de la isla, posición que expresan cuando envían a sus representantes a la Asamblea Nacional francesa argumentando que la liberación de esclavos traerá serias consecuencias para la economía de Haití.

En este contexto de disputa, en 1791 se produce en la isla una rebelión de la población negra, liderada por el exesclavo doméstico François Dominique Toussaint-Louverture, que declara su libertad y ataca las propiedades de los terratenientes. Este movimiento envía representantes a París y logra que en 1793 la Asamblea declare la emancipación de los esclavos de las colonias francesas y a Toussaint-Louverture como presidente vitalicio de Haití. Algunas de las medidas del presidente son mantener el sistema de plantaciones, obligando a los exesclavos a volver a sus trabajos para sostener la producción de azúcar, establecer relaciones comerciales con Estados Unidos y unificar territorialmente la isla con la invasión de la parte española de Santo Domingo. En este proceso se redacta la primera Constitución de la isla, en 1801, rechazada por Napoleón,

que resuelve terminar con el sistema republicano mandando una flota de ochenta barcos con 60.000 soldados para restablecer el sistema esclavista. El presidente haitiano es capturado y enviado a París, donde muere en cautiverio, pero la lucha continúa al mando de Jean-Jacques Dessalines, otro líder revolucionario negro.

En los casi dos años que dura esta guerra, las tropas napoleónicas sufren 50.000 bajas, tanto por la resistencia de los isleños como a causa de la fiebre amarilla, lo que produce la rendición francesa en 1804. Ese año se proclama la República de Haití, denominación indígena que reemplaza a la de Saint-Domingue.

La posible propagación de las ideas independentistas genera gran temor en las clases dominantes de distintos lugares, como el sur de los Estados Unidos, el Caribe y la América hispana, especialmente por las medidas que toma Dessalines, como la confiscación de todas las propiedades y la sanción de una reforma agraria que convierte a los exesclavos en propietarios. Como si fuera poco, la nueva Constitución de Haití prohíbe que la población blanca tenga propiedades.

La enorme trascendencia que tiene este proceso está dada por ser Haití el primer Estado de América Latina en obtener la independencia y la primera república negra del mundo. Su originalidad se debe a su doble emancipación: del colonialismo y de la esclavitud.

Objetivos británicos en Hispanoamérica

A partir de la pérdida de sus trece colonias americanas, Gran Bretaña se propone tener injerencia en las zonas de dominio español, potencia con la cual mantiene una histórica rivalidad. Esta política es alentada por algunos dirigentes americanos, que ven una

alternativa para liberarse de España, aunque los ingleses siempre persiguen sus propios objetivos estratégicos. Un ejemplo de ello es la actitud de Gran Bretaña cuando en 1806 Napoleón dispone el bloqueo continental, prohibiendo a los países aliados o dominados por Francia comerciar con los ingleses, obligándolos a buscar nuevos mercados donde colocar su producción. Con esa "excusa" se produce la primera invasión a Buenos Aires, ante lo cual el virrey Sobremonte abandona la ciudad y la defensa queda bajo el liderazgo de Santiago de Liniers, que organiza la reconquista al mando de una fuerza local compuesta por distintos sectores sociales. Después del triunfo, los vecinos convocan a un Cabildo Abierto que le quita el poder a Sobremonte y se lo entrega a Liniers, quien continúa con la preparación de batallones voluntarios, lo que le sirve para defenderse con éxito de la nueva invasión que se produce en 1807. Pueden sacarse varias conclusiones: España no estaba en condiciones de defender sus colonias; en las milicias se produjo una integración social que no se reflejaba en la sociedad civil; los criollos detentaban de hecho el poder y se fue generando un cierto sentido de la identidad.

Inicio del proceso revolucionario americano

La monarquía española viene dando muestras de una sostenida decadencia durante las últimas décadas del siglo XVIII, pero son las consecuencias de la guerra que enfrenta a Napoleón con gran parte de Europa lo que precipita la crisis que lleva a la pérdida de la mayor parte de sus colonias americanas. Carlos IV permite a las tropas francesas pasar por territorio español para invadir Portugal, país aliado a su principal rival, Inglaterra, generando la reacción de un sector de la nobleza, en marzo de 1808,

conocida como el Motín de Aranjuez. El rey es obligado a entregar la corona a su hijo Fernando VII, provocando la inmediata reacción de Napoleón, que ordena a toda la familia real que se traslade a la ciudad francesa de Bayona. Allí Bonaparte nombra de facto a su hermano José como rey de España. Esto produce en España un levantamiento popular que es reprimido de forma brutal por las tropas francesas, iniciándose como consecuencia la guerra de independencia.

Los levantamientos se propagan por gran parte del territorio y en las ciudades se forman Juntas de Gobierno que reemplazan a las antiguas autoridades, justificadas con la afirmación de que, en ausencia del rey, el poder vuelve al pueblo, que debe elegir a sus representantes. Para hacer más eficiente el ejercicio del poder, se forma en Madrid la Junta Central, que por el avance de las tropas invasoras debe trasladarse a Sevilla. Desde allí, su primera medida es un tratado de colaboración con Gran Bretaña en contra de Napoleón.

La Junta Central declara que los dominios americanos no son más colonias, lo que puede ser considerado como una igualación con los territorios peninsulares, con lo cual se invita a los americanos a enviar representantes para formar el nuevo gobierno. Resultados adversos en lo militar hacen que la Junta se debilite y sea reemplazada por el Consejo de Regencia, que se instala en Cádiz. Simultáneamente, con representantes españoles y, en menor proporción, americanos, comienzan las sesiones las Cortes Generales, cuyo mayor logro es la sanción en 1812 de una Constitución de carácter liberal que instaura como régimen de gobierno una monarquía limitada.

En América, la Junta Central, en términos generales, tiene legitimidad en ausencia del rey, pero no ocurre lo mismo con el Consejo de Regencia, creado sin consultar a los americanos, lo que genera dudas en cuanto a su representatividad. La reacción americana consiste en tomar el principio de que la soberanía retorna al pueblo y formar

juntas locales de gobierno, siendo las primeras las de México, Caracas y Buenos Aires. Y debido al malestar que genera la desigualdad de representantes en las Cortes Generales de España, las juntas de Caracas y Buenos Aires desconocen al poder peninsular.

El inicio de la ruptura con la metrópoli

El proceso independentista se desarrolla de manera distinta según las regiones, teniendo como principales protagonistas a los criollos (comerciantes, hacendados, profesionales y otros, que han sido relegados en la Administración pública a raíz de las reformas borbónicas) y en menor medida a los mestizos, aunque hay que destacar la participación de vastos actores sociales. Pero las revoluciones no representan los intereses del conjunto social.

Hacia 1810, llegan a América las noticias del dominio casi total del territorio español por parte de las tropas napoleónicas. Venezuela es la primera en recibirlas, lo que motiva a Francisco de Miranda y Simón Bolívar a formar una Junta de Gobierno. Esto se propaga por varias ciudades de Nueva Granada, como Cartagena, Pamplona, Socorro, Bogotá y Quito.

El mismo camino toman los rioplatenses cuando el 18 de mayo de 1810 exigen al virrey Cisneros la convocatoria a un Cabildo Abierto. Los sectores liberales prevalecen sobre los conservadores (que prefieren no modificar la situación política) y el 25 de mayo se conforma la Primera Junta. En esta conviven grupos moderados, como su presidente, el jefe del Regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra, y dirigentes más radicalizados, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que aspiran a la

independencia. En principio, como estrategia política, este órgano declara que actúa en nombre de Fernando VII para no confrontar con Gran Bretaña, aliado de España. Frontalmente, desde Buenos Aires se envían expediciones armadas a las regiones que conforman el Virreinato del Río de la Plata con el objetivo de que acepten el nuevo gobierno y para que las provincias manden representantes de sus cabildos. Se forma así la Junta Grande, ampliando el gobierno a veintidós personas.

Varias contiendas se desatan en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya que no sólo se lucha por la independencia, sino que también se produce una feroz puja por el poder, pues representan distintos proyectos políticos. Están los que aspiran a un gobierno central dirigido por Buenos Aires, los que optan por considerar los intereses regionales y los que claramente anhelan un sistema federal (Artigas en la Banda Oriental) o independiente como Paraguay. En este contexto se genera una situación política muy inestable en la que se suceden variadas formas de gobierno (Primer y Segundo Triunvirato, Asamblea General Constituyente de 1813 y Directorio), postergando la declaración de la independencia hasta 1816, cuando ya se ha producido la caída de Napoleón y la restitución de Fernando VII al trono español.

También en México el movimiento revolucionario comienza declarando fidelidad a Fernando VII, aunque deja claramente expresado que no se pretende solamente un reemplazo de las autoridades españolas. Al frente del levantamiento está el cura Miguel Hidalgo, que moviliza una gran cantidad de población india y mestiza exigiendo el fin de la explotación, haciendo que el reclamo de independencia sea inseparable de la demanda de abolición de la esclavitud y restitución de las tierras a las comunidades indígenas. Esta lucha se inicia el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores, cuando miles de personas avanzan sobre Guanajuato y Guadalajara enfrentando a las tropas del gobierno y saqueando gran parte de las propiedades, que

consideraban fruto de la explotación colonial. Sólo un reducido sector de criollos apoya a este movimiento, la mayoría adhiere a las fuerzas coloniales para defender sus propiedades. Los grupos revolucionarios carecen de una preparación adecuada para enfrentar a las tropas mejor organizadas del gobierno, lo que les imposibilita tomar la ciudad de México y sufren reiteradas derrotas. El propio Hidalgo es tomado prisionero y ejecutado, aunque el movimiento queda al mando de otro cura, José María Morelos, que declara la independencia de México en 1813.

Morelos continúa con los mismos objetivos de la revolución, aunque modifica algunos aspectos tanto de la estrategia militar como de la política. Se intenta dotar de mayor organización al ejército y que el programa político incluya a los criollos. Pero, más allá de estos cambios, las medidas continúan siendo profundas, como el establecimiento de un sistema parlamentario, la abolición del sistema de castas y del tributo, el pago de un impuesto de acuerdo con los ingresos de la población, el reparto de tierras entre quienes las trabajaban, la confiscación de las propiedades de los terratenientes y la sanción de una Constitución en 1814. La radicalidad de estas medidas hace que la corona española considere prioritario derrotar a Morelos, por lo que dispone de una importante fuerza militar que termina con la revolución social y con la vida de su líder en diciembre de 1815.

Enterados en Chile de la revolución de Buenos Aires, se forma una Junta Gubernativa que da comienzo a lo que se conoce como la Patria Vieja, que, como otras regiones americanas, se caracteriza por las diferencias y los conflictos internos entre sus principales líderes, como Manuel Rodríguez, los hermanos José Miguel, Juan José y Luis Carrera, y Bernardo O'Higgins. Esto es aprovechado por los españoles, que mandan tropas desde Perú y vencen a los criollos en la batalla de Rancagua, dando fin

a esta etapa. Varios dirigentes chilenos emigran hacia Mendoza, donde entran en contacto con San Martín, que cuenta con ellos para organizar el Ejército de los Andes.

Con el fin de las guerras napoleónicas en Europa y el ya mencionado regreso al poder de Fernando VII, España toma la firme decisión de recuperar sus colonias y manda una expedición militar de 10.000 hombres que desembarcan en la isla de Margarita, al este de Venezuela, para posteriormente entrar a Caracas.

Las luchas independentistas pierden iniciativa en el mundo hispanoamericano hacia 1815, pues las derrotas han sido importantes en México y Chile, Bolívar ha fracasado en Caracas, exiliándose en Jamaica, y el norte argentino está siendo invadido por las tropas realistas que responden al virrey del Perú. Sólo en parte de las provincias rioplatenses se conservan autoridades criollas.

Pero la causa revolucionaria no ha sido vencida y comienzan a delinearse nuevas estrategias militares y políticas. Bolívar, en su célebre *Carta de Jamaica*, afirma que la liberación americana es un proceso irreversible. Además, reformula en términos políticos su idea originaria y, si bien continúa pensando que la mejor forma de gobierno es un sistema federal, su experiencia inicial que mostró a los pueblos americanos con conflictos internos que los desunían hace que promueva un sistema centralizado con un Poder Ejecutivo fuerte y vitalicio. Bolívar siempre temió la fragmentación política y territorial de América, por eso propone algún sistema de acuerdos que una la mayor cantidad de regiones posibles, aunque se formen estados independientes. Esta situación de permanente inestabilidad también preocupa a San Martín, pero este considera la monarquía constitucional como el sistema adecuado para los futuros Estados americanos.

La revolución continental de Bolívar y San Martín

El año 1816 resulta clave para lo que se podría considerar el comienzo de la segunda etapa revolucionaria, que se extenderá hasta la batalla de Ayacucho, en 1824. Bolívar deja Jamaica para trasladarse a Haití y desde allí consigue el apoyo del presidente Pétion para organizar una expedición con el objetivo de retomar la lucha independentista en Sudamérica. A cambio, se compromete a abolir la esclavitud en todo el territorio de Nueva Granada.

Después de los intentos fallidos, Bolívar regresa definitivamente a Venezuela en 1816, donde el escenario político es distinto y se presentan condiciones más propicias para la causa revolucionaria. En principio, porque los sectores campesinos –conocidos como llaneros–, que antes habían apoyado a los españoles, no vieron satisfechas sus demandas y decidieron –con su líder Antonio Páez a la cabeza– unirse a las fuerzas bolivarianas. Los llaneros están constituidos mayoritariamente por población negra y mulata, y su adhesión a la causa se explica, en buena medida, por el cumplimiento de las demandas hechas a Bolívar, como la emancipación de los esclavos, la posibilidad de ascenso en el ejército de la población parda y el reparto entre soldados y oficiales de las propiedades españolas confiscadas en la guerra. Es recién cuando logra el control militar de su propio territorio que Bolívar decide la convocatoria a un congreso en Angostura para proclamar un régimen de gobierno republicano en pos de obtener el apoyo de los patriotas de ideología liberal. La campaña continental tiene uno de sus principales avances en 1818 con la victoria de Boyacá, que le permite entrar en Bogotá y proclamar su viejo proyecto de unir varios territorios en una sola nación, la Gran Colombia, integrada por los actuales Estados de Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.

Hacia 1814, la estrategia de San Martín, que ejerce la gobernación de Cuyo (desde allí organiza el Ejército de los Andes), es dirigirse a Chile para ayudar a su independencia y posteriormente ir a Perú, principal foco de resistencia española en Sudamérica. Para el cruce de la cordillera cuenta con oficiales argentinos y chilenos, pero la mayor parte de la infantería está compuesta por población negra que participa en la guerra a cambio de su libertad. El paso a Chile a través de los Andes enfrenta enormes dificultades propias del clima y la geografía, lo que produce el fallecimiento de soldados, mulas y caballos. Las batallas más importantes en la liberación chilena son las de Chacabuco y Maipú. Debido a su liderazgo militar y político, a San Martín le ofrecen encabezar el Poder Ejecutivo de Chile, pero el argentino prefiere cedérselo a O'Higgins y ambos declaran la independencia en 1818, acto que implica darle impulso a un proceso de lucha que debe continuar pues quedan focos españoles importantes en territorio chileno, como Valdivia, que recién en 1820 pasa a manos criollas.

La independencia chilena cobra gran importancia, ya que por varios años financia a San Martín en su organización de la expedición a Perú, que tiene su punto de partida en Valparaíso para dirigirse a las costas peruanas, bloquear el puerto del Callao y conseguir que los realistas abandonen Lima. Declara la independencia de dicho país en 1821 y es nombrado protector del Perú. Desde el gobierno, sus principales medidas son el control del poder de la Iglesia, la libertad para los futuros hijos de esclavos, la abolición de los tributos y de todos los sistemas de explotación de la mano de obra de población indígena, disposiciones que no son del agrado de las élites criollas, que paulatinamente le quitan el apoyo. Además, se envían contingentes de soldados a Ecuador para unificar las campañas militares sanmartiniana y bolivariana. En este aspecto cabe aclarar que el panorama político y militar se le está complicando a San Martín, en contraste con los éxitos de Bolívar que, luego de la trascendental victoria de

Carabobo, sanciona la Constitución Republicana y es proclamado primer presidente de la Gran Colombia. Esta diferencia en la situación de los dos líderes resulta determinante para que San Martín se retire del escenario político y militar americano, quedando Bolívar al frente luego de la conferencia que ambos tienen en Guayaquil.

Si bien la situación se complica en mayo 1824, cuando los españoles recuperan el puerto del Callao y Lima, la causa patriota recupera la iniciativa con las victorias de Junín, pero fundamentalmente con la de Ayacucho, comandada por Sucre, que prácticamente hace irreversible el proceso independentista.

México en 1910: hacia una revolución social

Por María Teresita Bonet

Para empezar, voy a tomar una frase del libro *Salvar la nación* (2006: 11), cuando Patricia Funes nos dice que para quienes nos interesamos por la historia latinoamericana hay dos preguntas que refieren a la búsqueda de su identidad: “¿Cómo somos?” o “¿Por qué no somos como...?”. De ahí la necesidad de mirar el ser argentinos, peruanos, mexicanos, brasileños, colombianos como espejo de lo que somos y de lo que no podemos ser.

Por eso, en principio ubiqué el tema en el contexto de la crisis del Estado oligárquico y su vinculación con las revoluciones sociales. En primer lugar, porque la Revolución mexicana es una salida del régimen oligárquico que se diferencia de la de otros países en que, si bien nace como un cambio político de ampliación en el sistema de representación, ese cambio incluso desde el mismo año 1910 se orienta hacia la revolución social.

Se distingue porque el quiebre del orden oligárquico se da por el concurso de un movimiento de masas. La participación campesina en 1910 impregna y modifica el recambio a nivel de las élites que proponía Madero en su enfrentamiento contra Porfirio Díaz. Diez años de guerra civil después de entonces iniciaba la reconstrucción del Estado y la redefinición de la Nación [...] la revolución mexicana hace a México más mexicano. (Funes, 2006: 79)

Este capítulo tiene tres núcleos conceptuales que lo estructuran. El primero es la revolución como ruptura del régimen oligárquico. El segundo son las reflexiones sobre la noción de revolución, tomando algunas miradas de intelectuales latinoamericanos de la época. Sobre todo, sobre dónde colocar el fin de la revolución, tema que ha dado lugar a un profundo debate: ¿finaliza con la muerte de Zapata?, ¿con el fin de Calles?, ¿con el fin del cardenismo?, ¿es Cárdenas una etapa de la revolución? De ahí que el tercer núcleo se base en la idea de revolución inconclusa que nos anticipa ya la etapa del gobierno Cardenista, y en este sentido el vínculo entre la revolución y el populismo mexicano. Núcleo de la identidad política latinoamericana.

El contexto político latinoamericano a inicios del siglo xx

Como señala José del Pozo en su *Historia de América Latina y el Caribe (1825-2001)*, en su salida del régimen oligárquico, México combina rasgos de guerra civil por la conquista de la democracia con rasgos de revolución social, proceso que lo diferencia de otros países latinoamericanos en los que la salida es a través de una ruptura interna de los partidos conservadores/liberales y de reacciones de la sociedad civil que se introducen a partir de la segunda crisis del modelo agroexportador dependiente en 1890, la reacción de los partidos políticos modernos y, fundamentalmente, la del movimiento obrero. Así, en Argentina se va a gestar, a partir de la Ley Sáenz Peña de 1912 y del ascenso de Yrigoyen en 1916, una hegemonía compartida o pluralista entre la clase terrateniente y los sectores medios. En Uruguay, después de las rebeliones del caudillo blanco Aparicio Saravia contra el régimen, se da una alianza entre el Ejército y el Partido Colorado que apoya a José Batlle y Ordóñez (1903-1911). La importante

reforma social, la ley de divorcio y la nacionalización del Banco de la República son los signos de ese período de gobierno, aunque la democratización social no tiene su correlato en la democratización política. El poder continúa dominado por la alternancia entre blancos y colorados.

En Chile se avanza hacia una diversificación de partidos modernos, como el partido radical, que atrae más a los sectores medios, y dos partidos de base obrera: el Partido Demócrata y el Partido Socialista, luego Comunista, en 1922. Estos no son mayoritarios, pero sus propuestas alcanzan masividad. La unidad liberal se quiebra y radicales y demócratas apoyan a Arturo Alessandri, que es elegido en 1920 y del cual se esperan las reformas sociales que no llegarán por la crisis salitrera y la alternancia de gobiernos militares a partir de 1924.

En Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, el sistema político se mantiene muy semejante al período anterior, con escasa o nula renovación de los partidos políticos y de la participación electoral. Pero en el caso de Perú, con la continuidad de la política dictatorial de Augusto Leguía (1919-1923), el movimiento obrero y la protesta estudiantil que lucha por una reforma universitaria van a ser muy significativos, porque son el comienzo de la acción política de Víctor Raúl Haya de la Torre y el centro de la expresión ideológica de José Carlos Mariátegui. Desde allí surgirán las luchas revolucionarias y diversas nociones de revolución que, si bien toman el concepto marxista, lo hacen desde la identidad de Perú resaltando, en el caso de Mariátegui, lo indoamericano y la oposición al imperialismo. Leguía es cada vez más excluyente, hasta que, intentando cooptar a los sectores medios y la clase obrera, hace algunas concesiones, como las ocho horas en la jornada de trabajo. La oposición del anarcosindicalismo y de los sectores anticlericales está impulsada por Haya de la Torre, que organiza una gran movilización contra la modificación de la carta constitucional

que pretende la reelección en 1923. Esta es su entrada en la política nacional con sus demandas apristas: secularización y nacionalización del Estado y oposición al autoritarismo de Leguía. A partir de ahí habrá una división aprismo/comunismo en el movimiento obrero estudiantil (Funes, 2006).

En el Brasil de la República Velha se suceden las intervenciones militares tras la caída de la monarquía. Minas Gerais y São Paulo son los dos estados fuertes, y la ausencia de partidos de izquierda hace que la protesta provenga de oficiales jóvenes con demandas progresistas, como el teniente Luis Prestes. En Venezuela, Guatemala, Ecuador y Paraguay la ampliación política está bloqueada por la permanencia de los regímenes oligárquicos.

La diferencia que presenta México puede deberse a que, según el esquema construido por Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli en su *Historia económica de América Latina* (1984), pertenece al grupo de los países en los que la presencia de mayorías indígenas hacen que, en el proceso de transformación de economías de producción a gran escala o de transición al capitalismo dependiente, se deba centrar la atención en la creación de un mercado privado de tierras, por lo que el problema central de puja y resistencias enormes se relaciona con la propiedad de la tierra. La resistencia de las comunidades aborígenes con explotación comunal de la tierra es constante, desde las reformas de Benito Juárez en adelante, durante toda la historia mexicana.

También Bolivia encauza el problema de la tierra desde abajo, desde los movimientos indigenistas que le “arrancan” la reforma agraria a Víctor Paz Estenssoro, aunque más tarde.

Fernando Mires afirma en *La rebelión permanente* (1989) que el avance del Estado oligárquico sobre la sociedad, que la puebla con el ferrocarril, los bancos, las casas de crédito, capitalistas ingleses y norteamericanos, es una verdadera “nueva conquista”.

Los primeros en saberlo fueron las masas de campesinos e indios pobres, despojados de sus propias tierras, vagando por los campos o aumentando las muchedumbres hambrientas alrededor de puertos y ciudades que nacen y mueren todos los días. (Mires, 1989: 158)

Y expresa de manera rotunda:

si hay un país en donde las contradicciones de la sociedad colonial se mantuvieron más abiertas que en otros, ese es México. Y si hay un país donde el capitalismo dependiente alcanzó un grado de desarrollo más violento y de explotación que otros, ese también es México. Por lo tanto, si se tienen en cuenta esas premisas, no hay por qué asombrarse de que en México, apenas se produjo una ruptura en su estructura política, hubiera tenido lugar una verdadera erupción social. (Mires, 1989: 159)

Durante muchos años, el país fue escenario de numerosas luchas sociales, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres.

México termina con un tipo de dominación oligárquica fuertemente personalista, centrada en el gobierno de Porfirio Díaz. El porfiriato es la típica forma de ejercicio del poder de base angosta, autoritario, clientelar; el señor gobierna el país como lo hace con su hacienda, excluyente de las mayorías étnicas y culturales. Porfirio Díaz encabeza contra Benito Juárez un movimiento antirreeleccionista, aunque luego se convierte en su principal defensor, permaneciendo en el poder entre 1876 y 1911, sólo interrumpido por el general Manuel González por un período muy breve.

Con el porfiriato, el clero recupera la tierra y, con ella, el poder perdido durante las reformas liberales de Juárez. De este modo se da el golpe definitivo a la propiedad de las comunidades aborígenes. El Ejército es la férrea corporación sobre la que apoya su poder. Pero su perdurabilidad no se sostiene sólo por la vía coercitiva, sino también por el bloque dominante que construye entre los propietarios de tierras, de minas y el capital extranjero.

Durante la etapa final del porfiriato, o en los albores de la revolución, la rivalidad entre los capitales norteamericano e inglés que se da en el mundo se define en México con la preeminencia del primero. En este contexto, hay un grupo influyente –“los científicos”– liderado por José Yves Limantour –financista y gran terrateniente– que pretende para el país la modernización centrada en la idea de progreso unida a la civilización europea y estadounidense. Se proponen sacar a México de la estructura tradicional de acumulación y desarrollar la industrialización a partir de la inversión norteamericana. Así, el avance de los capitales extranjeros sobre la agricultura y la minería –metales preciosos, cobre y estaño– fue muy rápido, y se realizaron grandes inversiones en productos tropicales con mucha demanda europea –café y tabaco–.

Esta idea de desarrollo y progreso nunca se realiza, pues las inversiones se concentran en los rubros tradicionales de exportación. El capital norteamericano crece rápidamente sobre el inglés en minería, transporte y petróleo. La Mexican Petroleum Company, del norteamericano Edward L. Doheny, y la Standard Oil de John D. Rockefeller se imponen sobre la Royal Dutch Company.

Porfirio Díaz pretende ser árbitro de los inversionistas extranjeros, lo que deriva en un distanciamiento por parte de los norteamericanos, que necesitan un gobernante obsecuente.

Debido a que la mayor parte de las inversiones estadounidenses se centra en el transporte, se construyen cerca de las dos terceras partes de las líneas ferroviarias de México. Los “científicos” temen la pérdida de autonomía de Díaz e intentan una mayor intervención del Estado, dando origen a una compañía mixta con participación estatal y norteamericana y levantando como lema la falacia de la “nacionalización de los ferrocarriles”.

Como en toda Latinoamérica, la burguesía terrateniente y minera no manifiesta predisposición a arriesgar parte de su formidable renta diferencial en inversiones destinadas a infraestructura necesaria para su propia acumulación. El proyecto industrialista y modernizante fracasa.

La cuestión agraria y la resistencia indígena

La política agraria de Díaz se caracteriza por la expropiación y concentración de la tierra en el proceso de modernización. A través del decreto de colonización de terrenos baldíos se lleva a cabo el saqueo de las propiedades indígenas y campesinas, y mediante la legalización de las expropiaciones el gobierno obtiene el derecho a vender la tierra pública a compañías deslindadoras. La propiedad comunal pasa a engrosar las haciendas y las compañías extranjeras especuladoras. Más de 810.000 hectáreas de tierras son transferidas durante este período.

Las antiguas comunidades que subsisten desde la época colonial son incorporadas a las estancias, formando un proletariado agrario muy pobre. De este modo, la hacienda no sólo absorbe sus tierras, sino también su autonomía y costumbres.

La resistencia y la acción recuperacionista comienzan mucho antes de la revolución. La rebelión de los indios yaquis se ha producido en 1875, y han logrado sostenerse con

relativa autonomía manteniendo sus prácticas de explotación comunitaria de la tierra, siendo ejemplo para numerosas tribus. De ahí que Díaz los reprima duramente, deportándolos a Yucatán y repartiéndolos como esclavos entre los grandes hacendados en nombre de la civilización. En 1910, el 77% de la población vive en el campo, del cual el 96% no tiene tierra o vive en terrenos mezquinos y sólo el 1% concentra el 85% de la tierra aprovechable (Mires, 1989).

A principios del siglo XX, algunos políticos comienzan a advertir el problema del indio y de la tierra -diría Tocqueville: "la amenaza de la igualdad"-, y comienza a gestarse la oposición a Díaz con la certeza de que no podrán derrocarlo sin la movilización de las masas campesinas.

A la par de los síntomas del agotamiento del modelo, donde las cosechas de maíz comienzan a disminuir rápidamente por el tipo de explotación, empieza la lucha antidictatorial y democrática contra Díaz. La oposición se gesta a través de los empresarios. La política de los científicos llevada a cabo por Díaz termina consolidando la inversión en las áreas tradicionales de la economía, pero el desarrollo tan rápido de las inversiones extranjeras provoca alteraciones en el modelo tradicional. Los salarios experimentan un período de alza pero vuelven a bajar, y con la estabilización del patrón oro cae el ciclo de la plata mexicana, provocando la restricción del crédito y el encarecimiento de los productos primarios, como el azúcar para la industria cervecera o el algodón para la textil. La producción industrial nacional decrece y el algodón y el azúcar son absorbidos por los monopolios, en su mayoría extranjeros. A esta vertiente pertenece Francisco Madero. Pero no hay un proyecto alternativo que, anunciada la crisis, permita a México salir de su economía de dependencia a través del desarrollo industrial. Por el contrario, las políticas que se piensan tienen que ver con la libre empresa, las facilidades crediticias y la

modernización de la agricultura. La oposición de este sector a Díaz es más bien política, antioligárquica.

La clase media

En las ciudades, la Administración, la pequeña producción, las profesiones liberales y los servicios forman una gran clase media. Como no ha habido en México un proceso sostenido de industrialización, esa población no puede integrarse adecuadamente en el sistema productivo, produciéndose entonces la pauperización de los sectores medios a comienzos del siglo debido a los altos precios de los alimentos, los alquileres y los impuestos. Surge un gran resentimiento hacia los terratenientes, los banqueros, los sectores predominantes, y se comienzan a unir las reivindicaciones con las de las clases subalternas. Aquí se producirán ciertas tensiones, porque los sectores liberales son mayoritariamente mestizos, no indios.

También comienzan a operar política e ideológicamente los intelectuales de clase media a través de un discurso antidictatorial. Hay una gran efervescencia cultural muy radical que se apropia y difunde ideas de Piotr Kropotkin, Pierre-Joseph Proudhon y Victor Hugo. A esa generación, aunque muy joven, perteneció Jesús Silva-Herzog. Se redescubre la idea de *pueblo*, propiamente de populismo agrario, siendo Orozco uno de sus propulsores con la idea de repartir la posesión legítima de la tierra entre el mayor número de hombres. Otro es Molina Enríquez y otro Luis Cabrera, con sus ideas sobre el rescate de los ejidos, expropiándolos o dándolos en arrendamientos. Mires recuerda el romanticismo ruso previo a la Revolución de Octubre en lo que respecta a la reconstitución de las antiguas comunidades agrarias. Por eso, muchos intelectuales se sienten fascinados por el agrarismo que representaba Emiliano Zapata.

Esta acción cultural pronto busca una salida política y se funda el Partido Liberal mexicano en 1906. Con origen en San Luis de Potosí, los liberales representados por Ricardo Flores Magón propulsan medidas radicales de protección de la clase media y de los trabajadores urbanos y rurales. En esos años, Magón expresa:

Primero creí en la política. Creía yo que la Ley tendría la fuerza necesaria para que hubiera justicia y libertad. Pero vi que en todos los países ocurría lo mismo que en México, que el Pueblo de México no era el único desgraciado, y busqué la causa del dolor de todos los pueblos de la tierra y la encontré: el capital. (Mires, 1989: 177)

El movimiento obrero

El movimiento obrero se irá consolidando en el transcurso de la Revolución. En sus orígenes, su desarrollo político es débil y no hay diferenciación entre los trabajadores rurales y los artesanos, porque su composición se debe al desplazamiento de los campesinos despojados de sus tierras y al desarrollo desigual de la industrialización. La mayor parte se concentra en la industria metalúrgica y la textil de San Luis de Potosí y Puebla. Allí, las primeras grandes huelgas estallan alentadas por el clima de descontento y oposición general, como la de hilados y tejidos de 1906. Pero la acción de protesta más fuerte es la de los obreros de la mina de cobre de Cananea contra la empresa norteamericana Cananea Consolidated Copper Company, en el estado de Sonora.

El movimiento obrero irá alcanzando mayores niveles de organización y combatividad a lo largo del proceso revolucionario, desplazando al anarquismo en la década del veinte, cuando se crea la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).

En el proceso revolucionario, la primera etapa será la maderista. Intelectual atraído por las ideas liberales, Madero publica *La sucesión presidencial*, donde manifiesta el propósito de fundar el Partido Antirreeleccionista a favor del sufragio. Ese libro y una conferencia que Díaz concede a una revista norteamericana agitan el clima, pues se ve una oportunidad de cambio que, a la vez, introduce tensiones dentro del propio régimen porfirista.

La represión a Madero termina de convertirlo en el líder unitario que necesita la oposición: porfiristas disidentes, liberales moderados, anarquistas y revolucionarios adherirán al Partido Antirreeleccionista en 1910. Es arrestado y se vuelve un mártir. Comienza la revolución y Madero es presidente interino hasta la realización de las elecciones. Su programa, el Plan de San Luís de Potosí, más bien pobre en materia de políticas sociales, es un plan de ruptura con el porfirismo. En el punto más significativo, el tercero, denuncia las expropiaciones de tierras a campesinos e indios y las declara sujetas a revisión para su posterior restitución a los verdaderos propietarios, además del pago de una indemnización por los daños sufridos. Convoca así a un levantamiento armado con el concurso de los campesinos. A partir de ahí, la revolución deja de ser sólo política para convertirse en social con centro en el problema de la tierra.

La revolución social

Ya vimos que los yaquis están planteando una resistencia mucho antes que las clases urbanas por el cambio político. En esta etapa, la lucha armada por la cuestión de la tierra viene del sur, del estado de Morelos, donde actúa Emiliano Zapata. Instituido en líder por el movimiento campesino, experimenta una forma de organización

productiva comunitaria ancestral de la tierra. De ahí que Mires señale que los habitantes de Morelos han perdido sus tierras pero no el sentido de su propiedad. Los ancianos de la aldea de Anenecuilco, frente a la circulación de políticos en busca de apoyo, renuncian a la representación de la asamblea que le da el poder por elección a Zapata, y con ese gesto le encomiendan la defensa de los ejidos campesinos. Zapata se convierte en el jefe del ejército revolucionario del sur. Para afirmar sus propias opciones políticas, los maderistas precisan de esta revolución, pero no cuentan con el cauce propio que ya tiene.

En el norte, mucho más heterogéneo, gran parte de la población está dispersa en el interior de las haciendas, las tradiciones de la lucha agrarista no tienen significado y las reivindicaciones no son de propiedad sino más bien de condiciones dignas de trabajo.

Trabajadores mineros de Chihuahua, Coahuilla y Sonora, trabajadores fabriles y pequeños comerciantes, confirieron a la revolución del norte un carácter no propiamente agrario y sus caudillos se caracterizaron por un radicalismo y un nacionalismo político fundamentalmente antinorteamericano. (Mires, 1989: 173)

La base de sustentación es un submundo agrario y urbano producido por la expansión del capitalismo dependiente: vagabundos y bandoleros reclutados clientelaramente y que no están apegados a algún territorio, sino a la figura de un jefe. Por eso Pancho Villa centra su carisma en la estrategia militar, no para la restitución de un orden, sino para la conquista de mejores condiciones de vida. Así, cuando Madero consigue su adhesión desata fuerzas que luego no podrá contener, pues no es un revolucionario social y su estrategia política está marcada por una actitud ambivalente debido a las presiones de los porfiristas disidentes representantes de la clase terrateniente y a las promesas destinadas al movimiento campesino.

Todo México asiste a una lucha insurreccional generalizada: Magón en la ciudad como expresión de la radicalización de los sectores medios, Orozco y Villa en el norte, Zapata en el sur, los yaquis en Yucatán, los obreros en Puebla y Veracruz, los estudiantes en la ciudad. A Díaz sólo le queda el aparato represivo, y es justamente ahí donde los oficiales subalternos producirán una grieta. El círculo de Díaz se divide y forma bandos irreconciliables: por un lado, los fanáticos representantes de la Iglesia, la casta militar y los latifundistas, y, por otro, los que dudan de su capacidad para mantener un orden, puesto en proceso de desestabilización. En 1911, los revolucionarios atacan la Ciudad Juárez y obligan a Díaz a renunciar. Como dice Mires, “la revolución mexicana era ya una formidable revolución social liderada por hombres tímidos”.

A partir de aquí, el interinato de León de la Barra será un porfirismo bajo nuevas formas, cuyo propósito consistirá en desarmar a las bandas que adhieren a los diferentes caudillos regionales revolucionarios.

Madero gana las elecciones en octubre de 1911 y comienza a gobernar entre dos fuegos: la contrarrevolución militar de Huerta y la revolución social. Esta situación muestra los límites de una revolución que es de masas pero liderada centralmente por una élite no revolucionaria, en el sentido social del término. Los revolucionarios del sur nunca fueron maderistas, sino zapatistas y agraristas, luchando por el derecho a la tierra.

La ruptura con Madero se presenta a través del Plan de Ayala, que dispone la recuperación de las tierras arrebatadas injusta e inhumana por caciques y opresores de los pueblos y que los usurpadores que se consideren con derecho a ellas deban defenderse ante tribunales revolucionarios. La represión militar brutal, el incendio de pueblos y el éxodo de campesinos, mujeres y niños hacia campos de concentración demuestran que la de Madero ya no puede ser la revolución de Zapata.

Orozco, enviado por Madero a sofocar el levantamiento, se alza en armas en Sonora. La acción revolucionaria se atomiza con diferentes frentes. Los yaquis se declaran en estado de rebelión y ocupan estancias. Madero crea algunos espacios por los cuales avanza la organización sindical obrera, pero en 1912, ya aislado, sólo cuenta con el apoyo de un ejército que no es suyo y la desconfianza de Estados Unidos para detener la revolución. Aunque William Howard Taft es contrario a la intervención norteamericana, la presencia de buques en puertos mexicanos tiene la intención de infundir la idea de que sólo la renuncia de Madero impedirá la invasión. El fracaso de Madero se debe a su pretensión de mantener la revolución social agraria subordinada a la revolución política.

Se inicia la dictadura de Huerta en 1912, fundada en nombre de la contrarrevolución. Los porfiristas confían en el retorno de un régimen semejante al porfiriato, pero Huerta no cuenta con el apoyo norteamericano, que, ahora a cargo de Woodrow Wilson, se inclina más por la vía diplomática que por el garrote. El dictador pretoriano intenta entonces negociar parcialmente con los diversos sectores revolucionarios, haciendo concesiones al movimiento obrero y al campesino. Logra la adhesión de Orozco, pero nunca la de Zapata: "la revolución del sur no puede soportar el estigma de la traición a sus ideales" (Mires, 1989: 214).

De ahí en más, la oposición a Huerta será dirigida por Venustiano Carranza. Latifundista, exporfirista y maderista durante Madero, es visto por muchos como su versión mejorada. Su discurso, centrado en el Plan de Guadalupe, no contiene ninguna propuesta de cambio social, pero ello se produce una vez destituido Huerta. La lucha contra Huerta es "un verdadero carrusel de rebeliones", "una confederación de movimientos con historias propias."

Estados Unidos comienza a manifestarse poco favorable a las dictaduras tradicionales con poca estabilidad, y Wilson envía marines a Veracruz en 1914 con el pretexto de evitar que el barco alemán Ipiranga desembarque armas para el gobierno. La invasión a Veracruz se hace con el supuesto de que Estados Unidos será recibido como un verdadero ejército de liberación, pero el nacionalismo antiimperialista norteamericano de México se pone de manifiesto en toda su magnitud. A diferencia de lo ocurrido durante el gobierno de Madero, esta vez los revolucionarios ocupan México como verdaderos vencedores. Y como las hazañas militares que hacen posible la derrota de Huerta son las del norte y el sur, ahora se trata de imponer sus condiciones. De este modo, una vez vencido el enemigo principal, las contradicciones estallan dentro de la propia revolución.

En 1917, en Querétaro, una convención constituyente modifica la Constitución de 1857, destacándose la educación libre pero laica en las escuelas primarias, los límites de la propiedad en función del bien público, el derecho a la expropiación por fuerza de utilidad pública, la nacionalización de los recursos del subsuelo. La mutua admiración se transforma en una alianza militar, y Zapata y Villa se comprometen a luchar después del triunfo de la revolución por la elección de un presidente civil. La fuerza del ejército de Carranza, primero contra Villa y luego contra Zapata, sumada a sus diferencias culturales y de origen, debilita esta alianza.

El sur será el foco de atención no sólo de Carranza, sino de los Estados Unidos. Durante todo el proceso revolucionario se ha gestado un movimiento social que irá más allá del asesinato de Zapata en 1919 y que no cejará hasta ver cumplido el Plan de Ayala, alentado por su virgen de Guadalupe y su "miliano". Intelectuales urbanos anarquistas y marxistas que descubren la práctica de la experiencia y de ahí la conciencia colectivista junto a la religiosidad de los campesinos, dieron origen a una

ideología bastante extraña en donde se mezclaba una gran desconfianza a todo lo que no era rural con un culto casi religioso a la figura de Zapata.

Fernando Mires concluye que el fracaso de Madero primero y de Carranza después se debieron a la incapacidad para articular desde el Estado rebeliones con distintos intereses. "Sus gobiernos fueron la expresión dramática de una situación en donde la clase dominante ya no podía gobernar y las clases populares todavía no podían hacerlo" (Mires, 1989: 222).

A partir de aquí, en los años veinte, revolución será sinónimo de reconstrucción. Los sonorenses Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928) emprenderán la tarea de domesticar el Ejército, el imperio del Estado sobre los poderes locales, y sellar una configuración de alianzas políticas, que no se harán con los campesinos sino que tendrán como pilares a los caudillos agraristas y al movimiento obrero. Lo nacional se expresa en un tímido reparto de tierras en las zonas más turbulentas de la protesta campesina: el sur (Funes, 2006).

Obregón consigue, a partir de importantes concesiones petroleras a empresas norteamericanas, el apoyo para sofocar la rebelión de los cristeros, que se oponen a las limitaciones del fuero de la Iglesia por parte del Estado. En este contexto será asesinado, y este asesinato cierra un ciclo de la revolución. La tarea de institucionalización de Calles tratará de imponer la lógica de la política por sobre la de las armas para afianzar el ejercicio de la democracia. Habrá que esperar a Cárdenas para un nuevo ciclo de profundización.

Las miradas sobre la revolución

La Revolución mexicana genera un profundo debate sobre los conceptos de nación y revolución en los años veinte latinoamericanos. Para Jesús Silva-Herzog, es una revolución social, nacional y popular. Para Vicente Lombardo Toledano, ideólogo del cardenismo y líder de la CROM, la revolución será la supresión de la propiedad privada por excelencia: la tierra.

si por revolución se ha de entender un cambio profundo en el sistema de la vida social, los mexicanos que deseamos sinceramente ese cambio en nuestro país y que juzgamos el proceso de los últimos veinte años con honradez tenemos que declarar que la revolución no ha triunfado aún en México. (Funes, 2006: 360)

Ya desde su exilio en México, Haya de la Torre define la Revolución mexicana como el primer esfuerzo victorioso de un pueblo indoamericano por la lucha contra la doble opresión feudal e imperialista. Para esta concepción, es una revolución social, no socialista y sí nacional. Con el concurso y la representación de un frente de clases, liderado por las clases medias, edifica un Estado nacional no clasista. Hay ahí un punto de convergencia entre revolución y nación. Sin embargo, para el creador del APRA, aunque el Estado mexicano es burgués y la revolución es burguesa, no se puede desconocer el valor, carácter social y significación histórica de la segunda.

Por su parte, entre 1924 y 1930, Mariátegui expresa que el antirreeleccionismo de Madero es una bandera contingente pero que concentra todos los descontentos, todos los explotados, todos los idealistas. La revolución no tiene un programa, pero su

programa se va construyendo en torno a la primera reivindicación: la defensa de la tierra usurpada por los latifundistas.

La idea de revolución inconclusa que sugiere Toledano también es expresada por Mires, cuando señala que “se ha dicho que la revolución es como una gran madre que devora a sus hijos (1989: 216). A primera vista parece ser una cadena interminable de desplazamientos de fuerzas, de muertes, de oportunismos y traiciones. La imagen negativa se refuerza si pensamos en el sufrimiento de los campesinos durante la guerra revolucionaria. Pero a las revoluciones no puede medírselas por los saldos cuantitativos. Existe en ese proceso la afirmación de lo nacional, la reformulación del Estado acompañada de la reformulación de la nación, que se expresa en el formidable rechazo a los norteamericanos en Veracruz, en la formación del movimiento de mujeres campesinas que lucha por la recuperación de la tierra casi tan temido como el anarquismo, en el golpe al sistema feudal de acumulación con la recuperación parcial de las tierras de los campesinos, en el salto cualitativo de la clase obrera hacia su sindicalización: “cuando lo imposible se vuelve cotidiano, se vive una revolución, y esa fue la experiencia revolucionaria en México” (Mires, 1989: 217).

La idea de revolución permanente implica que las derrotas, la muerte de la clase política revolucionaria y el derramamiento de sangre no suponen su propia muerte, sino su recomposición a través de los movimientos colectivos que hacen la historia, aunque en algunas etapas queden enterrados en sustratos profundos. Sin esta experiencia precedente, Cárdenas no hubiera podido avanzar en su populismo hacia la reforma agraria, verdadero sustrato de la historia mexicana.

Como dicen Cardoso y Pérez Brignoli (1984), la fragilidad estructural del sistema se reflejaba en la carencia de estructuración de su apoyo político popular

-campesinos/obreros- y en su debilidad frente a la gravitación interna de la economía controlada desde el exterior.

En tal sentido:

el único recurso viable que tuvo el gobierno para poder imponer mejores condiciones en su relación con las compañías extranjeras era estructurar y organizar la unidad del movimiento obrero y campesino; y esa fue la política de Cárdenas. (Funes, 2006: 379)

Bibliografía

Cardoso, Ciro y Héctor Pérez Brignoli (1984). *Historia económica de América Latina*.

Barcelona: Crítica.

Del Pozo, José (2002). *Historia de América Latina y el Caribe (1825-2001)*. Santiago: Lom.

Funes, Patricia (2006). *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo.

Mires, Fernando (1989). *La rebelión permanente*. México: Siglo XXI.

Las experiencias populistas en América Latina (1930-1960)

Por Carlos Ciappina

Una cuestión terminológica: ¿populismo o procesos nacional-populares?

En el mundo de las ciencias sociales, en el de los medios masivos de comunicación y en el campo de la política, es difícil encontrar una categoría descriptiva tan polisémica como la de populismo. En particular, en América Latina. Repasemos algunos sentidos. El término se comienza a utilizar para definir a los movimientos campesinos rurales de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos (1890-1920) y Rusia (década de 1880). En la perspectiva académica latinoamericana tradicional, de raigambre liberal, lo que hoy llamamos populismo se identificaba tradicionalmente con los fascismos europeos. Gino Germani (1950) elabora una primera definición de los “movimientos nacional-populares” (en lugar de utilizar “populismo”). Para él, los populismos se encuadran en los procesos de modernización acelerada de las sociedades latinoamericanas. A partir de la década de 1930, en plena crisis, las “masas” entran a la vida política, pero al no encontrar sistemas políticos consolidados (como en el caso de las democracias europeas), esa movilización se hace de la mano de un líder. Estos liderazgos se asientan en principios demagógicos y en la apelación a las emociones y sentimientos en lugar de hacerlo en los términos de la racionalidad política. Demagogia, tutelaje político e

irracionalidad son entonces los rasgos del populismo (para los estudios de Germani, el peronismo).

A mediados de la década del sesenta, Torcuato Di Tella desarrolla una perspectiva levemente diferente a la de Germani: el populismo surge como un efecto de la acelerada movilización popular en países subdesarrollados, liderada por sectores medios que ven allí la posibilidad de destruir el statu quo oligárquico y establecer una coalición policlasista que los tenga como principales beneficiarios del nuevo estatus político-social.

Uno de los rasgos distintivos de las experiencias populistas es el rol preponderante que tienen los liderazgos en la construcción política. Tanto las perspectivas marxistas como las liberales –y por razones diferentes– señalan críticamente esta característica:

en la perspectiva marxista tradicional, el populismo es visto como una especie de estrategia de los sectores hegemónicos o dominantes para neutralizar la movilización autónoma de la clase obrera o de los trabajadores. Un segmento de la clase dominante se vuelca al populismo para alentar una movilización social que coopte los proyectos verdaderamente revolucionarios. La idea de “alienación” resulta clave en estas interpretaciones, donde las clases no hegemónicas apoyan gobiernos que no buscan satisfacer sus “verdaderos” intereses (la revolución económico-social socialista).

para el corpus académico y político liberal, el populismo es una experiencia profundamente negativa. Podríamos distinguir aquí dos tipos de interpretaciones: una economicista y otra político-social. En el plano de la teoría económica ortodoxa, el populismo “viola” las leyes de la economía liberal: la regulación estatal, la creación o nacionalización de empresas públicas y la intervención en el mundo bancario, financiero y laboral generan “distorsiones” que dan como resultado inflación, estancamiento económico y desconfianza de los inversores del capital. En el plano

político-social, el liberalismo percibe el populismo como una amenaza para la división de poderes republicana, y cuestiona el carácter “demagógico” de la apelación a las masas de los gobiernos populistas y sus líderes.

En las antípodas de las interpretaciones liberales hay miradas que consideran al populismo una ideología política que se distingue de las demás porque apela a la categoría *pueblo*, como un todo indiferenciado que posee virtudes positivas y objetivos de realización comunes (Norberto Bobbio).

Para autores como Ernesto Laclau, el populismo es, sobre todo, una interpelación democrático-popular opuesta y/o antagónica a las representaciones de la élite oligárquica. Esta perspectiva hace especial hincapié en los rasgos discursivos-culturales que se constituyen desde el pueblo para buscar la construcción de hegemonía.

A partir de las décadas del sesenta y setenta del siglo XX, en el contexto de las visiones críticas que surgen con la teoría de la dependencia, comienza a analizarse el populismo desde una perspectiva que se corre de los análisis políticos para verlo como un proyecto económico-social que vendría a resolver los desequilibrios que se generaron en las sociedades latinoamericanas a partir de 1930. Con la crisis del modelo oligárquico-liberal agromineroexportador, se abre la posibilidad del desarrollo de una industria nacional que abastezca el mercado de consumo interno creciente. El populismo sería entonces un proceso económico-social que requiere de una alianza de clases que articule las necesidades y demandas de una burguesía nacional en ascenso junto a una clase obrera en proceso de organización y estratos medios que aportan los cuadros de conducción. Nacionalismo, antiimperialismo y posicionamiento antioligárquico son, desde esta mirada, los principios político-discursivos que expresa esta “alianza”.

Las interpretaciones de la década del ochenta del siglo XX (Octavio Ianni, Guillermo O'Donnell) hacen hincapié en darle al Estado un rol clave en el desarrollo del populismo. Así, habría un Estado populista, eje sobre el cual se establece un nuevo modelo de acumulación –económicamente industrialista y socialmente inclusivo–. El Estado populista constituye así una matriz social estadocéntrica: interviene en la economía, regula el mercado de trabajo, gestiona empresas públicas y despliega políticas sociales.

Una variable de la perspectiva anterior es la que identifica un Estado populista “corporativo”, visto como el ordenador de la vida social en torno al agrupamiento de organizaciones económicas y laborales. Así, en el caso de los sindicatos, el Estado corporativo tendría un doble rol: promover la organización sindical y, a la vez, ponerle límites a la movilización obrera para mantener el sistema dentro del funcionamiento del capitalismo.

Para autores como Carlos Vilas, el Estado es la clave de interpretación del populismo, en tanto Estado autónomo. En manos de una élite movilizadora nacionalista, civil y/o militar, se constituye en el impulsor de las políticas económicas que promueven la industrialización –a veces a pesar de la propia burguesía industrial– y, a la vez, de la organización de la clase trabajadora. Este Estado lucha permanentemente por mantener la autonomía que le permita establecer alianzas y coaliciones político-sociales que mantengan el rumbo del proyecto económico-social y político en los parámetros del proyecto nacional.

Autores como Alain Touraine prefieren hablar de un Estado nacional-popular, que se constituye en los países dependientes como una reacción nacional a los procesos de modernización que se proponen desde el exterior. En este sentido, Estado, nación,

sistema político y pueblo no son ámbitos separados, sino la expresión de una identidad común que busca alcanzar un modelo latinoamericano de desarrollo.

Un intento de definición para el “populismo”

Si tuviéramos que intentar una definición que nos resultara útil para interpretar los movimientos populistas de las décadas de 1930 a 1960 en América Latina, haríamos hincapié en los siguientes aspectos:

La crisis del sistema capitalista en 1930 abrió una “ventana de posibilidad” para desplegar cambios profundos en las sociedades latinoamericanas, que tradicionalmente estaban conducidas económica y socialmente por una élite terrateniente integrada a la economía industrial central a través de la exportación de bienes primarios.

Esa ventana de posibilidad se expresaba en una reducción importante del comercio internacional y de las demandas de bienes primarios por parte de las economías centrales, una disminución significativa de la dependencia de las economías centrales.

Al mismo tiempo, estas sociedades latinoamericanas poseían actores sociales que se referenciaban con tradiciones nacionalistas y populares desde la época de la revolución independentista. Dichas identidades populares existían invisibilizadas y reprimidas por las repúblicas oligárquicas.

Identidades populares indígenas, mestizas, campesinas –como en los casos de Bolivia, México, Ecuador–, e identidades nacionalistas, federales, gauchescas –como en el cono sur: Argentina, Uruguay, Brasil–, se encontraron en una coyuntura favorable para expresar sus búsquedas y anhelos.

Partidos y/o movimientos políticos con la capacidad de movilizar a los sectores sociales subalternos recuperaron esas identidades y tradiciones nacionales, populares y resistentes a las élites liberales.

Estos partidos y/o movimientos movilizadores accedieron al Estado y lo utilizaron como herramienta para instalar un profundo proceso de transformación del patrón económico-social oligárquico, en especial desplegando políticas económicas que primero se propusieron “salir” de la crisis capitalista y luego se orientaron a desarrollar una industrialización sustitutiva -Argentina, Brasil- o a dinamizar la propiedad rural -México- para alcanzar autosostenimiento.

Amplísimos sectores de la población excluida durante el período de las repúblicas liberales se incorporaron a la vida política: las mujeres, los trabajadores rurales y los obreros de las grandes ciudades. La movilización política apeló a la organización de los trabajadores, tanto de carácter rural -el México de Lázaro Cárdenas o la Guatemala de Jacobo Árbenz- como de tipo urbano -la Argentina peronista-. Estas organizaciones, lejos de ser una construcción acotada a la permanencia de los líderes populistas en el gobierno, persistieron por décadas, otorgando una autonomía con respecto a los distintos gobiernos pospopulistas que en muchos casos se transformó también en resistencia a procesos neoconservadores.

Por vía de la gestión estatal, se consolidan de un conjunto de derechos de carácter laboral y social, atados en general a las condiciones de empleo.

Como rasgo específico del populismo latinoamericano, podríamos señalar la tensión permanente entre el proyecto de modificación de la matriz económica hacia un modelo industrialista y los alcances de la persistencia de la matriz agromineroexportadora.

Gobiernos nacional-populares en América Latina: línea de tiempo

Brasil: Getúlio Vargas (1930-)

México: Lázaro Cárdenas (1934-)

Argentina: Juan Domingo Perón (1946-)

Guatemala: Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo

Uruguay: Tomás Berreta (1947) y Luis Batlle

Bolivia: Víctor Paz Estenssoro

México: Lázaro Cárdenas y las promesas de la Revolución (1934-1940)

Podríamos afirmar que a inicios de la década de 1930 el ideal y la práctica que la Revolución mexicana ha desplegado entre 1910 y 1917 están “congelados”. Es cierto que esa gran revolución social y política ha tenido que luchar contra enemigos poderosos del interior y el exterior de México, y que esto ha retrasado la organización política y las reformas económicas profundas.

México posee una Constitución nueva (1917) que incluye derechos laborales (a la sindicalización), de las mujeres, de acceso a la tierra (la reforma agraria), de resguardo de los recursos naturales (declarados en manos del Estado) y un posicionamiento antiimperialista. Pero los gobiernos resultantes de la revolución frenan el impulso revolucionario. Los sindicatos están fuertemente vinculados con los gobiernos y los líderes de turno, el voto femenino no se aprueba hasta 1953, la reforma agraria se mueve lenta (3.000.000 de hectáreas distribuidas entre 1917 y 1934) y entregando

pequeñas parcelas en zonas que prácticamente no pueden ser utilizadas para la agricultura o la ganadería. Finalmente, los recursos naturales (sobre todo, el petróleo) del subsuelo mexicano siguen fluyendo hacia Estados Unidos y Gran Bretaña, en especial debido al acuerdo petrolero de 1925, que, si bien establece ciertas restricciones a las empresas extranjeras, garantiza la extracción por cincuenta años, prorrogables. Del posicionamiento antiimperialista poco queda a finales de 1928: el embajador norteamericano Dwight Morrow participa de actos de gobierno, influye en la política religiosa mexicana y garantiza la presencia de las empresas norteamericanas en el territorio.

En este contexto, Plutarco Elías Calles (el “Jefe Máximo”) elige al gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, para encabezar la lista del Partido de la Revolución Nacional para la presidencia de México. Cárdenas plantea un “Plan Sexenal” que tiene, centralmente, cuatro propuestas: la creación de una Comisión Nacional Agraria que acelere la entrega efectiva de tierras; la creación de empresas nacionales que compitan con las extranjeras y modos de regulación en las industrias de “interés nacional”; la firma de convenios colectivos de trabajo apoyados por el Estado, y que los sindicatos no hagan política partidaria porque el Estado no es lo mismo que un patrón privado; lo que llamó “educación socialista”, una educación laica, racionalista y antirreligiosa. El primer obstáculo de este programa es el propio Calles, con quien Cárdenas rompe políticamente a poco de asumir y exilia en 1935.

Cárdenas y la clase obrera

La clase obrera mexicana comienza un proceso de organización a partir de los logros de la Revolución. En 1918 se constituye la Confederación Regional Obrera Mexicana

(CROM), con un discurso de contenido clasista y una práctica que propone desarrollar actividad sindical y política al mismo tiempo, pero es rápidamente cooptada por el entramado político surgido de la revolución, en particular en su versión estatal. En 1920 se consolida la Confederación General del Trabajo, de tendencia anarquista y con una perspectiva apolítica en relación con el Estado, y hacia 1923, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), de perfil católico.

A inicios de la década del treinta se constituye una nueva confederación obrera, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que tiene una perspectiva más combativa que la CROM y sostiene como principios la lucha de clases, la ruptura con el imperialismo y la dependencia, y las reivindicaciones inmediatas propias de la clase obrera (salarios, jornada laboral, etcétera). El objetivo final, de la mano de Lombardo Toledano, es la eliminación del capitalismo.

Lázaro Cárdenas encuentra este “mapa” sindical a inicios de su gobierno.

Para Cárdenas, la CTM tiene que ser fuerte y unificada –en especial por su oposición a la CROM–, pero debe ser “un grupo de presión” que actúa sobre el Estado y sobre las empresas del capital privado. No puede transformarse en una organización que esté por sobre el Estado, pero sí puede ser una que apoye –aunque conserve su autonomía– las políticas antiimperialistas. Esta posición de “apoyo mutuo” con preeminencia del Estado se verá en los conflictos por la nacionalización de los ferrocarriles (1937) y en la expropiación petrolera (1938).

Cárdenas y el campesinado

Uno de los pilares de la construcción política de Lázaro Cárdenas será el campesinado. Al igual que lo ocurrido con las organizaciones obreras, la Revolución mexicana abre

las posibilidades de organización de este sector. En 1926 se constituye una gran Liga Nacional Campesina, compuesta por campesinos pobres, ejidatarios y asalariados rurales. Se propone hacer cumplir los artículos 27 -condiciones de propiedad de la tierra y formas de posesión comunitaria y ejidataria- y 123 -condiciones laborales y contractuales- de la Constitución, fortalecer los ejidos -incluyendo la creación de cooperativas- y lograr la “socialización” de la tierra. Completa su programa con una fuerte vertiente anticlerical. Radicaliza su discurso a principios de 1930, incorporando al Partido Comunista y a los que plantean la unión obrero-campesina (Lombardo Toledano).

En 1933 -en medio del conflicto entre Calles y Cárdenas- surge la Confederación Campesina Mexicana (CCM), a partir de dirigentes agrarios y políticos salidos de la revolución. Su programa se basa en exigir el cumplimiento de la reforma agraria y apoyar a Lázaro Cárdenas -apoyo que es retribuido ya durante la campaña electoral de 1933-. La CCM será, durante el proceso efectivo de distribución de tierras, el principal sostén político del gobierno.

La política económica cardenista: reforma agraria y nacionalizaciones

El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracteriza por llevar adelante una política económica -y su correlato social- centrada en la búsqueda del cumplimiento de los principios de la revolución: independencia económica, reforma agraria y antiimperialismo.

Para comprender la profundidad de la reforma agraria basta señalar que entre el triunfo de la revolución (1917) y el inicio del gobierno de Cárdenas (1934) se han

repartido algo más que 4.500.000 hectáreas. Cárdenas distribuye en seis años (de 1934 a 1940) 18.000.000 de hectáreas, la mayor distribución de tierras en la historia agraria de América Latina.

La reforma agraria se propone terminar con el peso que el latifundio tiene en México. Toma como base la propiedad ejidal de la tierra -o sea, una propiedad de "uso colectivo"- y el respeto de la pequeña y mediana propiedad privada campesina. Se sustenta en la nacionalización y distribución de las grandes haciendas de dueños extranjeros -lo que está prohibido por la Constitución- y la distribución de tierras estatales. Y para darle soporte económico, se crea un Banco Nacional de Crédito Ejidal -que proporciona créditos, capacitación y maquinaria agrícola- y un Banco Nacional de Crédito Agrícola -para pequeños y medianos propietarios individuales-.

Los efectos inmediatos son una reducción notable del latifundio, la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los campesinos que se incorporan a las propiedades ejidales y de los pequeños y medianos propietarios privados.

Los campesinos son el principal apoyo de Cárdenas durante los enfrentamientos con las empresas extranjeras y ante las presiones de sus países de origen (Estados Unidos y Gran Bretaña).

Otro aspecto relevante de Cárdenas es su política antimonopólica -sobre todo, contra las empresas extranjeras-. Se comienza a cobrar impuestos a las súper rentas de las empresas monopólicas y a la explotación de los recursos mineros y naturales -en especial, a las empresas petroleras y mineras-. Al mismo tiempo, un conjunto de medidas promueve la industrialización: aranceles diferenciales que gravan los productos venidos del exterior, impuestos a las empresas extranjeras y exención impositiva a las nacionales.

Pero la medida más audaz y controvertida es la expropiación petrolera de 1938. La historia de la extracción petrolera en México es la historia de un enorme despojo de los recursos nacionales. La legislación heredada de Porfirio Díaz –que permitía la apropiación privada del subsuelo– y la inercia de la posrevolución habían logrado un triste saldo para la cuestión petrolera: en 1922, el 99% del petróleo extraído en México se exportaba, y sólo el 1% quedaba en territorio mexicano. La Ley Calles-Morrow (1925) reconocía los derechos de las compañías petroleras extranjeras previos a la revolución a perpetuidad, y permitía que se renovaran las licencias posteriores a 1917 por cincuenta años más. En cuanto a las cuestiones impositivas y laborales, las empresas petroleras prácticamente no estaban gravadas, y además sobreexplotaban a la mano de obra mexicana, al tiempo que la sometían a situaciones permanentes de discriminación en relación con los trabajadores norteamericanos o británicos.

Inicialmente, Cárdenas no prevé una lucha frontal con las empresas petroleras. Más bien se fija una estrategia de apoyo a la creación y crecimiento de una empresa estatal. En 1935 crea Petróleos Mexicanos, junto con una legislación para que las empresas extranjeras garanticen la provisión de crudo a fin de que México se autosustente. Pero el conflicto surge de la mano de una disputa laboral: los obreros del petróleo mexicanos –afiliados a la CTM– inician, en un contexto favorable a sus demandas, un reclamo salarial y de condiciones laborales que pretenden incluir en un convenio colectivo de trabajo.

Hacia 1937 el conflicto se ha tornado una huelga prolongada, lo que lleva a la intervención del Estado, que trata de mediar entre las demandas obreras y las de las empresas. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estipula que, de los 70.000.000 de pesos que solicitan los sindicatos como resarcimiento, las empresas paguen 26.000.000 –reduciendo a menos de la mitad las demandas obreras–. Pero las empresas

ignoran el fallo y reponen sólo 20.000.000. El desconocimiento de la autoridad estatal pone al gobierno en una situación nueva: si acepta las exigencias empresarias, pierde el apoyo obrero y además continúa la extracción petrolera. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas difunde un mensaje a todo el país en donde relata la historia de la explotación y el saqueo del petróleo en México, declarando la expropiación de las compañías extranjeras. Las empresas petroleras intentan todo: los embajadores norteamericano y británico amenazan con diversas represalias -crediticia y hasta militar-, cierran la venta de petróleo a México y la de repuestos para las refinерías expropiadas, y finalmente apoyan una rebelión -del general Saturnino Cedillo-. Todos estos intentos fracasan y la expropiación transforma a México en un país que se autoabastece y exporta.

Argentina: el peronismo trastoca el orden oligárquico-liberal (1946-1955)

Entre 1862 y 1930, Argentina se ha constituido como una de las naciones mejor integradas al modelo de la división internacional del trabajo: granos y carnes -entre otros productos como maderas, minerales, etcétera- que abastecen las necesidades de la Revolución Industrial europea -en particular, británica- permiten que el país sea relacionado definitivamente con el "orden y progreso".

El despliegue de un sistema de comercialización moderno por parte de empresas británicas -ferrocarriles, bancos, puertos, telégrafos- y una construcción europea en el campo de la cultura -teatros, palacios, edificios públicos fastuosos- muestran a una élite liberal exitosa y una consideración internacional y latinoamericana que equipara la Argentina con los países del viejo continente. Sin embargo, el país esconde una

realidad mucho menos auspiciosa: la expansión ganadera y agrícola se han hecho a costa de las poblaciones originarias; en las explotaciones rurales azucareras, madereras y ganaderas, los trabajadores rurales sufren situaciones de sobreexplotación; y en las grandes ciudades se instalan crecientes contingentes de inmigrantes que conforman un proletariado en situación de explotación severa -horarios extenuantes, ninguna seguridad sanitaria, salarios bajos- e introducen las ideas anarquistas y socialistas, severamente reprimidas por el poder político.

Este país extremadamente desigual, con un pronunciado crecimiento económico, una élite poderosa y homogénea y una situación privilegiada en la división internacional del trabajo, ingresa en una severa crisis socioeconómica a partir de 1930 que afecta precisamente la principal fuente de recursos del modelo agroexportador: el derrumbe de las exportaciones, la caída de las importaciones y la falta de crédito externo afectan la renta agraria y la inserción de Argentina como proveedora de la economía británica. La crisis resulta tan profunda que los sectores conservadores apoyan un golpe de Estado -el primero del siglo XX- que interrumpe el gobierno popular de Yrigoyen e intenta, por la vía de la represión y la exclusión política, y con el Pacto Roca-Runciman como modo de reforzar la dependencia del Imperio británico, mantener el viejo orden oligárquico liberal.

Para inicios de la década de 1940 -la denominada Década Infame-, el país está lejos de la "edad de oro" liberal: la economía agroexportadora no se ha recuperado, los productos manufacturados del exterior siguen sin ingresar y una industria nacional sustitutiva se desarrolla a pesar de los deseos oligárquicos. Pero es en el campo social donde las falencias de la Argentina liberal muestran toda su crudeza: la crisis agrícola ha impactado en todas las economías terratenientes y cientos de miles de campesinos y

peones rurales viven en condiciones paupérrimas, y millones se amontonaban en las ciudades como mano de obra en condiciones de sobreexplotación y bajísimos salarios.

La transición hacia el peronismo

La crisis se agudiza con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y, frente a una élite liberal que no puede dar respuestas, un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas da un golpe de Estado que, por primera -y única- vez derroca a un gobierno oligárquico. El golpe de 1943 tiene un programa nacionalista y autoritario: mantener la neutralidad en la guerra, apoyar la industrialización, promover la religión católica en el sistema laico de educación, sostener el orden jerárquico de la sociedad argentina y una política cultural antiliberal. Pero hay un grupo de coroneles -el Grupo Obra de Unificación, o GOU- que promueve una agenda mucho más profunda: nacionalización de la economía, neutralidad en la guerra, retorno a la democracia, preeminencia del Estado sobre la economía, y, sobre todo, mayor inclusión y mejora en las condiciones de vida de las masas populares urbanas y rurales. El liderazgo de ese grupo lo comienza a ejercer paulatinamente el coronel Juan Domingo Perón.

Ubicado inicialmente en una oficina de menor rango (como director del Departamento de Trabajo, luego secretario de Trabajo y Previsión), Perón inicia un proceso de arbitraje sostenido con los sindicatos de las distintas ramas de la industria, garantizando acuerdos con las patronales en los que las mejoras de salarios y de condiciones laborales van in crescendo. El Estado por primera vez favorece a los obreros y alienta la sindicalización, y Perón impulsa una serie de medidas que lo ubican claramente como el líder del ala popular de la revolución del 4 de junio.

Entre 1943 y 1945, la influencia del coronel crece: pasa de secretario de Trabajo y Previsión a ministro de Guerra, y luego a vicepresidente de la república. Cuando, a fines de setiembre de 1945, los líderes de las Fuerzas Armadas reparan en su poder y la élite terrateniente y sus medios de comunicación lo equiparan a los líderes del derrotado nazifascismo europeo, los generales golpistas lo deponen y encarcelan en la isla de Martín García.

El primer peronismo

El 17 de octubre de 1945, una movilización estimada en un millón de personas, en su mayoría trabajadores urbanos y rurales, reclama por el retorno de Perón. El gobierno, tomado por sorpresa, cede, y la figura del líder cobra una dimensión enorme. Las elecciones de febrero de 1946 le dan el triunfo al Partido Laborista frente a la alianza oligárquica llamada Unión Democrática. Se inicia así el primer peronismo (1946-1955).

Durante este período se avanza en un modelo de mayor redistribución de la riqueza, la creación de un Estado de bienestar anclado en el pleno empleo, el fortalecimiento del sindicalismo, la ampliación de la participación política –con el voto femenino– y una política sistemática de industrialización nacional y nacionalización de bienes y servicios públicos.

En 1947 se establece un Consejo Económico Social, integrado en condiciones de igualdad por el Gobierno, organizaciones sindicales y patronales, y en 1949 se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con una política que apunta a lograr el pleno empleo, incrementar salarios para incrementar consumo, e incrementar consumo para desarrollar la industria sustitutiva.

La presidencia de Perón tiene en Eva Duarte de Perón un componente distinto al de los populismos de esa época: Evita –para el pueblo trabajador– despliega una enorme actividad en el desarrollo de políticas sociales desde el Estado, es el principal vínculo con las organizaciones sindicales y promueve con energía el voto femenino y la participación política de las mujeres: además de la legislación que equipara los derechos para votar, las mujeres pueden ser electas; veintitrés diputadas completan el número más extenso de mujeres en un Parlamento de América hasta ese momento. La patria potestad, que era atribución exclusiva de los varones, es declarada por la Constitución de 1949 como igualitariamente compartida.

La Fundación Eva Perón, creada en 1948, deja de lado la lógica de la beneficencia para trabajar en la idea de los derechos sociales, una forma de desarrollar acciones desde el Estado hacia las familias en situación de vulnerabilidad: forma enfermeras, asistentes sociales, construye hospitales, hogares de niños y ancianos y escuelas a lo largo de todo el país, lo que la transforma en una institución de avanzada a nivel mundial.

En el año 1952, una vez consolidada la Confederación General del Trabajo, se establecen los convenios colectivos de trabajo, que garantizan condiciones laborales y salariales negociadas en forma obligatoria entre las patronales y los sindicatos con el arbitraje estatal.

Hay importantes medidas en el campo de la educación: en 1948 se crea la Universidad Obrera, en 1949 se asegura la gratuidad de la enseñanza universitaria, y en 1952 la gratuidad de la enseñanza secundaria.

En materia de política económica, el peronismo se sustenta, a grandes rasgos, en una intervención creciente para regular y promover la industrialización nacional, el control de precios y salarios y, sobre todo, el comercio exterior, base de la entrada de divisas al

país. También se busca planificar los grandes aspectos de la vida económica y social en dos planes quinquenales.

Las políticas socioeconómicas del peronismo significan –opinión que no discute casi ninguno de los trabajos académicos sobre el tema– un enorme proceso de modernización junto a la distribución de la renta. Esto último representa un incremento de la riqueza para los sectores trabajadores por medio del aumento en el salario directo –paritarias y aumentos por rama y sector de la industria– e indirecto –el conjunto de bienes y servicios que presta en Estado y que significa una reducción del costo para la clase obrera y otros trabajadores–.

El período comprendido entre la reelección de Perón en 1952 y el golpe oligárquico de 1955 tiene algunos sobresaltos en términos económico-políticos: las restricciones de una cosecha perdida y la baja en la productividad industrial frenan el proceso de redistribución de la renta, a la vez que los grupos sociales vinculados a las élites – Fuerzas Armadas y jerarquía católica– inician un proceso de resistencia cada vez más activa que apunta a la destitución del presidente.

Hacia el año 1954, sin embargo, la crisis económica ha sido superada, aunque la alianza conservadora se ha fortalecido con la articulación entre las Fuerzas Armadas liberales, la jerarquía de la Iglesia católica y los partidos “tradicionales” (radicales, socialistas comunistas). El golpe militar de setiembre de 1955 finaliza la primera experiencia peronista, aunque la matriz social argentina ha sido modificada sustancialmente.

Brasil: crisis de la élite terrateniente y viabilidad del proyecto varguista (1930-1954)

Brasil tiene, en varios aspectos, diferencias en relación con la historia de los países de América Latina. Durante toda la etapa colonial, es una sociedad que se caracteriza por tener el mayor número de esclavos africanos de América Latina. Su independencia es muy diferente al caso español, lo que significa que la sociedad brasileña prácticamente no se modifica: el retorno del rey portugués a Europa significa dejar a su hijo Pedro de Alcántara a cargo de Brasil. Dom Pedro I declara la independencia del Imperio del Brasil de la monarquía portuguesa en el año 1822, por lo que el pasaje de la colonia a la independencia se hace casi sin conflicto armado y por un acuerdo de élites, evitando la guerra interna y el riesgo –siempre latente– de un conflicto que permita la sublevación de los esclavos.

De este modo, se transforma en una nación independiente como un imperio, lejos de la lógica republicana de las excolonias españolas. La esclavitud, institución que sustenta su economía, continúa hasta 1888 (Brasil es el último país de Occidente en abolirla).

En 1889 se establece la república. Nuevamente, el pasaje es un acuerdo de élites, con el emperador abandonando el trono y retirándose a Europa. La brasileña se constituye como una república oligárquica clásica latinoamericana. Cada región se especializa en un bien primario exportable: el caucho de la Amazonia, el café (oro verde) de São Paulo, el azúcar, las piedras preciosas y el oro de Minas Gerais y el ganado de Rio Grande do Sul. La base de esta enorme capacidad exportadora es la tenencia de la tierra: gigantescos latifundios se organizan como plantaciones, haciendas o concesiones caucheras y sus dueños son, a la vez, el poder político y judicial en cada uno de los estados.

La crisis de 1930 y la emergencia de Getúlio Vargas

La crisis de 1930, al igual que en el resto de América Latina, pone en crisis a la república liberal oligárquica por la baja en las exportaciones de materias primas y la caída en la entrada de productos manufacturados.

La profundidad de la crisis hace crujir el orden político y un golpe de Estado termina con el gobierno de Washington Luís, el último presidente de la “vieja república”. En un contexto de ruptura de los pactos entre los estados de Minas Gerais, São Paulo y Rio Grande do Sul, asume la presidencia provisional Getúlio Vargas. A partir de ese momento, y hasta su suicidio en 1954, Vargas será el actor central de la política brasileña. Puede dividirse la experiencia varguista en tres períodos: de 1930 a 1934, de 1934 a 1945, y de 1950 a 1954.

La presidencia provisional (1930-1934)

El primer período de Vargas a cargo de la presidencia tiene un carácter provisional, y su principal preocupación es lograr establecerse políticamente: interviene los gobiernos oligárquicos de los estados federales que resisten la creciente injerencia centralista, reduce el peso de las policías estatales –fuerza de choque de los gobernadores–, centraliza paulatinamente la política en Rio de Janeiro y desintegra las fuerzas del tenientismo. En este primer momento, muestra su vocación de cambio, creando el

Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, y los Ministerios de Educación y Salud.

También amnistía a los tenientistas de la columna Prestes.

En 1931 da un paso inédito para el Brasil oligárquico: sanciona la Ley de sindicalización, que permite todos los procesos de sindicalización previa autorización del Ministerio de Trabajo.

Una vez consolidado en el gobierno, Vargas propone una reforma constitucional. La nueva Constitución establece un Congreso Nacional bicameral, reduce las autonomías estatales a favor del gobierno central y limita los alcances de la propiedad extranjera, nacionalizando algunos recursos naturales, estableciendo el voto femenino y los contenidos de la enseñanza a cargo del Estado federal y no en manos de las élites locales.

La presidencia constitucional (1934-1938)

El período de 1934 a 1938 está signado por fuertes enfrentamientos políticos entre el Partido Integralista –profascista, integrado por tradicionalistas católicos y terratenientes y liderado por Plínio Salgado– y la Alianza Libertadora Nacional – conformada por el Partido Comunista, otros partidos de izquierda y el sector de las Fuerzas Armadas que, junto a Luís Prestes, propone la reforma agraria–. Esta polarización responde también, sobre todo en las grandes ciudades, al enfrentamiento izquierda-derecha fascista de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial.

En 1935, en las ciudades de Natal, Recife y Rio de Janeiro estalla un intento revolucionario liderado por el Partido Comunista y los tenientistas. Getúlio Vargas

declara el estado de sitio y detiene a la mayoría de los partidarios de la Alianza Libertadora Nacional.

El Estado Novo (1938-1945)

Los juicios a los líderes comunistas y la inestabilidad generada por los profascistas son aprovechados por Vargas para anular las elecciones previstas para 1938. Se cierra el Congreso Nacional, se transfieren poderes del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, y se sanciona una nueva Constitución que instala el Estado Novo. Los integralistas, descontentos con el rumbo que toma el gobierno, intentan un levantamiento para derrocar a Vargas, pero fracasan y su líder es expulsado del país.

En abril de 1938, Vargas declara extintos todos los partidos políticos -de izquierda y derecha- y propone una nueva Constitución nacional.

El Estado Novo profundiza las políticas nacionalistas y antiliberales en un proceso de unificación del Estado y un conjunto de normas socioeconómicas: se crea una verdadera Administración pública nacional (la DASP) y se declaran abolidos los impuestos interestatales para unificar el mercado interno totalmente.

El Estado interviene crecientemente: se establece el impuesto a la renta -un impuesto progresivo- y se crean empresas estatales claves, como el Consejo Nacional del Petróleo (CNP, antecedente de Petrobras), la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), la compañía de acero Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco y la Fábrica Nacional de Motores. También son de este período la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT), la estabilidad del empleo público, la reglamentación del trabajo de menores y del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.

Las medidas de Getúlio Vargas generan una gran reacción en las élites conservadoras, que durante la Segunda Guerra Mundial son contenidas por el rol preponderante de los militares, la alianza con los Estados Unidos y la participación de Brasil en el bando de los aliados. En octubre de 1945, finalizada la guerra, el Ejército brasileño, formado en la escuela anticomunista y liberal de las Fuerzas Armadas norteamericanas, da un golpe de Estado y llama inmediatamente a elecciones.

El período 1945-1954

En las elecciones de 1945, Vargas, retirado en su estado de Rio Grande do Sul, apoya la candidatura de Eurico Dutra, su exministro de Guerra. Para esto, crea el primer Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). El gobierno de Dutra da un vuelco profundo a las políticas varguistas: elimina diversas trabas a las importaciones, reduce los salarios de los empleados públicos, abre la economía financiera al capital norteamericano, prohíbe el Partido Comunista y rompe relaciones con la Unión Soviética.

En octubre de 1950, las elecciones le dan el triunfo nuevamente a Vargas. Durante el período de 1950 a 1954 intentará avanzar más rápido en las reformas de carácter nacionalistas y populares: decreta el monopolio estatal sobre el petróleo brasileño con la creación de Petrobras, el proyecto de Electrobras -la empresa estatal de energía eléctrica-, las restricciones a la importación de bienes extranjeros y un incremento salarial del 100% -inédito en la historia brasileña-. Esta política genera una fuerte oposición interna, en particular de los sectores terratenientes, las grandes empresas vinculadas al capital transnacional y los partidos políticos de la derecha liberal. El descontento es ampliado considerablemente por una campaña desde los grandes

medios de comunicación escritos, con el periodista (y diputado) Carlos Lacerda acusando a Vargas de corrupción y de querer “izquierdizar” al Brasil.

Cuando un atentado dirigido a Lacerda deja vivo al periodista pero asesina a uno de sus custodios –un joven de la Fuerza Aérea brasileña–, a la presión mediática y política se le suma la de las Fuerzas Armadas. Acorralado políticamente, Vargas elige suicidarse antes que entregar el poder. El ciclo nacional-popular finaliza con la muerte del presidente y el llamado a elecciones que abrirá un nuevo capítulo en la historia brasileña, esta vez de la mano de un proyecto desarrollista.

Bibliografía

Benítez, Fernando (2015). *Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana, III: El cardenismo*. México: Fondo de Cultura Económica.

De Ípola, Emilio (1991). “Peronismo y Populismo. Una nueva propuesta de interpretación”. En: *Working Paper*, N° 35. UBA.

De la Torre, Carlos (2013). “El populismo latinoamericano”. En: *Nueva Sociedad*, N° 247.

Di Tella, Torcuato (1965). “Populismo y Reforma en América Latina”. En: *Desarrollo Económico*, vol. 4, N° 16.

Durán, Leonel (comp.) (1972). *Lázaro Cárdenas, ideario político*. México: ERA.

Grosso, Alejandro (2009). *Los dos príncipes: Juan Domingo Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado de populismo latinoamericano*. Villa María: EDUVIM.

Hirst, Mónica. *La época de Vargas: 1930-1945*. Disponible en: Bibliotecaclacso.edu.ar/ar/libros/critica/nro5/Hirst.pdf.

Laclau, Ernesto (2007). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Medin, Tzvi (1992). *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*. México: Siglo XXI.

Mackinnon, María Moira y Mario Alberto Petrone (comps.) (1999). *Populismo y neopopulismo en América Latina: el problema de la Cenicienta*. Buenos Aires: Eudeba.

Rein, Raanan (1998). *Peronismo, populismo y política, 1943-1955*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Trías, Vivian (1978). "Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Batlle Berres-Herrera. Tres rostros del populismo". En: *Nueva Sociedad*, N° 34.

Viguera, Aníbal (1993). "Populismo y neopopulismo en América Latina". En: *Revista Mexicana de Sociología*, N° 3.

Vilas, Carlos (2004). "¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del 'neopopulismo' latinoamericano". En: *Revista de Sociología e Política*, N° 22.

Los movimientos sociales en la Argentina: de los noventa a la actualidad

Por Saúl Casas

Neoliberalismo y transformación estructural

El origen de la profunda transformación experimentada por la Argentina en las últimas décadas es posible encontrarlo en las modificaciones que se inician con la dictadura militar (1976-1983). Desde aquella época se vienen experimentando cambios en la estructura productiva que se sostenía en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones desde los años treinta. Con la dictadura se transforma la matriz productiva y de esa forma se va imponiendo un nuevo comportamiento socioeconómico basado en la valorización financiera y la apertura comercial.

Esto afecta todas las dimensiones de la vida social, porque desde ese momento, y por primera vez, junto a la quiebra del régimen democrático se construye una realidad de libre mercado que apunta a superar la crisis del Estado de bienestar que se inicia en los setenta por la desindustrialización y el endeudamiento. Es decir, se altera la base productiva y, de manera notable, la estructura de la sociedad.

Esta tendencia no puede ser revertida con el regreso a la democracia en 1983, y el gobierno de Ricardo Alfonsín (1983-1989) es envuelto por una crisis muy profunda que deriva en el adelantamiento de la entrega del poder. El Estado benefactor se precipita hacia una crisis de mayor envergadura, que únicamente puede ser resuelta –según el discurso neoliberal que se instala con fuerza en ese momento– sobre la base de las

transformaciones estructurales. La hiperinflación de 1988 y 1989 es clave, porque da pie a la toma de decisiones drásticas.

El gobierno de Carlos Menem, que asume en octubre de 1989 luego de un consenso notable, logra llevar adelante un paquete de reformas fundamentales que constituyen un modelo que descansa sobre tres pilares: la convertibilidad, la reinserción del país en el mercado internacional de capitales, y las reformas estructurales –privatizaciones, ajuste fiscal, apertura comercial y liberalización financiera, descentralización, flexibilización laboral, reforma del sistema previsional–, medidas que, tomadas en forma de “shock”, modifican la sociedad argentina.

Las políticas de reforma del Estado y la consolidación definitiva de un nuevo régimen de acumulación terminan de quebrar la matriz estadocéntrica, desplazándose varias actividades públicas hacia el mercado y consolidándose un nuevo modelo de relaciones entre Estado y sociedad.

Los costos sociales de la reforma estructural

Estas transformaciones promueven diversas cuestiones sociales y económicas que pueden esquematizarse en cuatro grandes ejes:

Concentración de la propiedad, del capital y del ingreso nacional. Distribución regresiva del ingreso. Cambio en el vínculo entre desempeño económico y desempeño del empleo, donde los tramos de reactivación económica no tienen efecto sobre el empleo.

Empobrecimiento de la mayoría de la población. Crecimiento explosivo de los índices de desocupación y deterioro de las condiciones de vida y trabajo: desempleo,

subempleo y empleo precario crecen persistentemente. Vulnerabilidad, precariedad, inestabilidad, clandestinidad del trabajo y caída de las remuneraciones conocidas como “flexibilización laboral”. Cambios regresivos en la estructura social: polarización, segmentación, fragmentación y exclusión.

Debilidad institucional y presupuestaria en materia de servicios públicos, políticas sociales y políticas activas de estímulo a la competitividad “real”. Estado con déficit fiscal permanente y pésimas prestaciones sociales. Reducción del gasto público en general y del social en particular: educación, salud, seguridad social. Deterioro de la calidad de las políticas sociales. Reducción del margen de acción fiscal para atender a grupos sociales, provincias, regiones. Sistema impositivo altamente regresivo. Alto nivel de corrupción.

Sistema económico vulnerable a los cambios internacionales, con retiro de inversiones frente a situaciones de desequilibrio –por ejemplo, la crisis mexicana– por tratarse de “capitales golondrina” –están mientras los negocios sean rentables y seguros–; también las exportaciones dependen de los precios internacionales –productos primarios–. Fuerte sometimiento y débil equilibrio frente al mercado financiero internacional, del cual dependen préstamos y negociaciones de deuda y, en definitiva, todo el financiamiento-endeudamiento –cada vez más caro– externo –desequilibrio de la balanza comercial–. Recesión, desinversión, declinación del PBI y estancamiento económico en general. Desindustrialización y consolidación de un modelo de acumulación basado en la exportación de productos primarios.

Este esquema nos permite observar un aspecto que es necesario remarcar para el período estudiado: el deterioro de las políticas públicas, específicamente las aplicadas en el denominado gasto social, lo cual puede verificarse en el marco del ajuste sobre salud, vivienda, educación y seguridad social, y el achicamiento de la capacidad del

Estado para garantizar el empleo. Esta orientación evidencia un claro desmantelamiento de los restos del Estado de bienestar, donde se observa además un desgaste creciente de los servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y, sobre todo, la reducción de los salarios, pese al crecimiento de la productividad.

La crisis del modelo y las consecuencias sociopolíticas

Es necesario efectuar una evaluación general de las consecuencias del modelo de los noventa que permite la consolidación de un nuevo bloque de poder controlado por los grandes grupos económicos nacionales y el capital extranjero, que, bajo la adhesión abierta a los postulados neoliberales, logran imponer un nuevo modelo de dominación social, fuertemente excluyente de los sectores populares y de amplias franjas de la clase media.

El neoliberalismo es el sustento ideológico donde se cimenta la tan mentada reforma del Estado, cuyo instrumento más conocido es la privatización de las empresas públicas y la desregulación de las actividades económicas, frente al papel anterior que asumía con el control de precios y la intervención en los mercados. El Estado pierde capacidad de control -incluso respecto a los servicios privatizados-, y se traslada al mercado el rol de asignar recursos. Un Estado constituido de esa forma se autoexcluye de sus posibilidades (y deberes) de preservar los derechos ciudadanos y de responder a las demandas de la sociedad. Esto redundará en el cuestionamiento de su legitimidad como garante del bien común y del papel mediador de los partidos políticos y de la clase política en general, lo que acrecienta el malestar de la sociedad hacia el sistema

político y la política misma, que podría definirse como una clara crisis de representación política.

La profunda crisis de socialización se manifiesta en la conformación de una nueva lógica de organización social, donde la privatización de lo político y la preeminencia de la economía divorciada de la ética del bien común se constituyen en los rasgos decisivos de la Argentina de los noventa. Esta experiencia genera una sociedad fragmentada, basada en la premisa del “sálvese quien pueda”.

Asociada a los cambios operados a nivel de la política interna, tenemos que incluir la nueva estructuración del ámbito del trabajo, tendencia que se viene manifestando en el mundo desde la década de 1980 con el avance de la globalización. Las principales consecuencias han sido la exclusión social, la precarización laboral y la caída de los derechos sociales. A lo largo del reciente proceso de transformación de la economía y el Estado, se producen reformas en la legislación laboral que anulan garantías previamente existentes.

El sindicalismo es llevado a posiciones defensivas que no pueden evitar el deterioro de las condiciones de los trabajadores. En cambio, ciertos privilegios favorecen a algunos sectores de la dirigencia sindical, que ingresan en una forma de pacto implícito con el gobierno de Menem (1989-1999). El sindicalismo se adapta entonces a la modernización promovida por el Poder Ejecutivo, si bien un sector resiste a la embestida neoliberal, aunque fragmentariamente.

Ya en la segunda mitad de 1989 se suscitan conflictos laborales en diferentes fábricas, y los trabajadores estatales, como los docentes, protagonizan varias huelgas. La alineación de la conducción de la CGT con el menemismo y la centralidad que adquiere el conflicto en el sector público conducen al nacimiento en 1992 del Congreso de Trabajadores Argentinos, que luego se convertirá en la Central de Trabajadores de la

Argentina (CTA). Esta nueva central es una muestra de la aparición de un sector sindical con autonomía respecto del Estado y los partidos políticos, incluso articulando su acción con los movimientos sociales. Por otra parte, surge una corriente interna en la CGT, que no tiene una propuesta alternativa al modelo sindical pero se separa del sector más alineado con el proyecto oficial del gobierno. Este nuevo sector conformó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), liderado por el secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano.

Esta fractura en el sindicalismo tiene sus consecuencias. Los gremios en su conjunto pierden capacidad de confrontación y negociación, lo que permite la consolidación de nuevas formas organizativas que participan por fuera del sistema institucional para la canalización de demandas. Surgen movimientos sociales que vehiculizan la protesta social –cortes de ruta, asalto a gobernaciones, etcétera–, que a su vez reciben una fuerte cobertura de los medios de comunicación. Estas movilizaciones son la muestra de la profundización de la crisis de representación, que se evidencia en la mayoría de las instituciones políticas y gremiales. Con una fuerte presencia de estos actores, que incluso toman decisiones en asambleas, se puede observar la configuración –de hecho– de una forma novedosa de democracia directa.

Los nuevos movimientos sociales

A comienzos de los noventa se producen las primeras reacciones a las medidas implementadas por el gobierno de Carlos Menem, sobre todo de los trabajadores del Estado, afectados por el proceso de racionamiento de sus puestos de trabajo, y del gremio docente (CTERA), en defensa de la educación pública. En esta primera etapa, la

movilización social se caracteriza por constituir una primera forma de confrontación con el modelo instituido.

Para los autores que analizan el período, el alza de la conflictividad no tiene una dirección estratégica, mostrando contradicciones y fracturas entre los diferentes grupos. Pasados los primeros cuatro años del gobierno menemista, que propicia cierta estabilidad en los precios al bajar drásticamente los índices de la inflación y permitir la recuperación del consumo interno, la conflictividad social se va acrecentando. Hacia 1995, se inicia un proceso de quiebre en el orden capitalista mundial con la crisis denominada “Efecto tequila”. Esto afecta a la Argentina, que evidencia un incremento significativo de los índices de desocupación. Las consecuencias son el aumento de la conflictividad social, pero también algunas novedosas formas de organización.

Según opina Héctor Palomino, podría afirmarse que el origen de estos nuevos movimientos sociales es múltiple, destacándose el surgimiento de redes territoriales favorecidas por la vecindad y aglutinadas de manera casi excluyente por dos factores primordiales: la desocupación y el cierre de fábricas. Esto permite que la acción común derive en la búsqueda de alternativas para conservar las fuentes de trabajo.

Entre esas experiencias es de notar el surgimiento del movimiento de desocupados o piqueteros, que en principio reclaman el reingreso al mercado de trabajo cortando las calles y rutas. Tiene su origen en la provincia de Neuquén, en las jornadas de Cutral Co entre julio de 1996 y abril de 1997, donde desocupados y docentes cortan la ruta y son violentamente reprimidos por la policía provincial, represión que le cuesta la vida a Teresa Rodríguez. Según Paula Klachko, estudiosa del tema, a partir de los conflictos de Cutral Co y Plaza Huincul comienzan a adquirir centralidad estas formas de acción colectiva que han dejado una fuerte impronta en la sociedad argentina: en el corte de rutas confluyen trabajadores ocupados y desocupados que toman decisiones en

asambleas como una forma de “democracia directa”, y nuevas experiencias de organización que adquieren cierta independencia de organizaciones políticas y sindicales tradicionales.

Otra de las alternativas en la lucha a lo largo de la década menemista da origen al movimiento de fábricas recuperadas, donde los trabajadores deciden ocupar el local cerrado por sus dueños y volver a ponerlo en funcionamiento. Este novedoso estilo organizativo tiene su inicio hacia 1995, buscando la autogestión ante el cierre de empresas y la imposibilidad de reubicarse en el mercado laboral. Silvia Rodríguez afirma que el movimiento se monta en base a tres ejes: la ocupación de la fábrica, la resistencia al desalojo y la posterior puesta en marcha de la producción, bajo la consigna *ocupar-resistir-producir*.

Los sindicatos, salvo excepciones, no tienen mayor participación en este movimiento, y en cierta forma quedan al margen de las decisiones que los obreros organizados toman. Así, las empresas recuperadas comienzan a extenderse y adquieren diferentes formas jurídicas, desde las sociedades anónimas, hasta las cooperativas, buscando establecer un nuevo marco jurídico que las contenga. Lo interesante de este movimiento, que aún sigue vigente, es que persigue una forma horizontal de organización y distribución de los beneficios y ha permitido la igualdad entre todos los trabajadores en base a un proyecto económico en común.

Al final del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), otra de las formas de organización social son las asambleas que se desarrollan en diferentes barrios de ciudades como Buenos Aires, Rosario o La Plata. Allí aparecen como un verdadero foro popular, y discuten desde situaciones puntuales del barrio hasta la política de la ciudad y su proyección nacional. Es importante el rol de los sectores medios en esos espacios, donde aparecen diversos objetivos que van alimentando formas de

democracia directa, desarrollándose un espíritu participativo que claramente pone en tela de juicio el sistema de representación política y, de alguna forma, el régimen político en su conjunto, basado en los mandatos electorales existentes. La consigna “que se vayan todos” es la expresión más radical de esta tendencia. Quizás su mayor preocupación no son las estrategias de supervivencia, más relacionada con los sectores populares, sino la necesidad de la transformación de los valores institucionales vigentes y la realización de acciones simbólicas contra la política y los dirigentes políticos en general.

En un trabajo de conjunto dirigido por Maristella Svampa puede leerse que, en el marco de esas nuevas movilizaciones sociales en Argentina, aparecen las experiencias de las asambleas barriales como un espacio multidimensional.

En primer lugar, se lo puede ver como un espacio de organización y deliberación que se piensa en ruptura con los modos tradicionales de representación política y en favor de otras formas de autoorganización de lo social, con aspiraciones a la horizontalidad y proclives al ejercicio de la acción directa.

En segundo lugar, las asambleas expresan la emergencia disruptiva de un nuevo protagonismo, a la vez indisolublemente político y social, que quiebra el fatalismo discursivo ideológico de los noventa, devolviendo a los individuos la capacidad de devenir verdaderos actores de la vida pública, de convertirse en sujetos del propio destino, tanto individual como social. En esta dirección, las asambleas traen consigo la promesa de la creación de espacios de solidaridad y de confianza a partir de los cuales (re)construir los lazos sociales, tan socavados y mercantilizados tras una década de neoliberalismo.

En tercer lugar, estas nuevas experiencias reposicionan a las clases medias, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar importante de la escena política.

En este contexto, después de 2001 y en algunos casos, comienzan a darse una serie de vínculos tanto a nivel territorial como político y de acción social que permiten que las empresas autogestionadas logren articularse con las asambleas barriales y los movimientos piqueteros, con lo cual conforman un frente de lucha más consistente, que logra mantener formas de funcionamiento y cierta coordinación. En el mes de julio de 2001, a unos meses de la crisis de diciembre, se intenta constituir un primer congreso piquetero, que busca establecer maneras coordinadas de acción. Allí acuerdan un pliego de reivindicaciones y un plan conjunto de acciones de protesta. Pero esos encuentros muestran algunas grietas en el proceso de articulación con evidentes divisiones internas, evidenciando cierta tendencia que ha puesto límites al trabajo unitario dentro del movimiento. Sin embargo, la actuación del movimiento piquetero sigue teniendo protagonismo en las luchas políticas y sociales más allá de la caída del gobierno de De la Rúa y del posterior interregno de Eduardo Duhalde, entre enero de 2002 y mayo de 2003.

En los noventa va apareciendo otro tipo de acciones sociales de protesta que es necesario destacar y que en cierta forma se inscribe en el repertorio de enfrentamiento al modelo de dominación impuesto por el menemismo. Algunas de estas expresiones no tienen que ver con el sector laboral productivo. Entre ellas están las marchas del silencio frente a crímenes aberrantes sostenidos en la impunidad oficial, como el caso del asesinato de la joven María Soledad Morales en el año 1990 en Catamarca. Entre estos movimientos de oposición al menemismo, las organizaciones de derechos humanos surgidas en los ochenta redoblan sus esfuerzos. En base a la consigna “juicio y castigo a los culpables”, el movimiento de derechos humanos se enfrenta a las llamadas “leyes de impunidad” (Ley de obediencia debida y Ley de Punto Final) promovidas por el gobierno de Raúl Alfonsín, y luego a los indultos a las Juntas

militares decretado por Carlos Menem. Una importante renovación promueve el movimiento cuando hacia 1996 surge la organización H.I.J.O.S., que agrupa a los hijos de desaparecidos y asesinados por la dictadura. Sus acciones adquieren mucha visibilidad en el ámbito público a través de marchas y de la utilización del “escrache” como instrumento de repudio a represores. El surgimiento de H.I.J.O.S. reactiva la lucha al politizar la demanda de derechos humanos y ampliar su horizonte uniéndose a otros sectores, como el movimiento estudiantil, incluyendo acciones sobre problemáticas que afectan especialmente a los jóvenes y niños frente a la represión policial y la vulnerabilidad social, y al denominado “gatillo fácil”, así como denunciando al sistema penitenciario y la vida de los internos en las cárceles.

El movimiento social y la crisis de la hegemonía neoliberal

El ciclo de la hegemonía neoliberal se comienza a cerrar a partir de la agudización del conflicto social en 1999. El gobierno de la alianza UCR-FREPASO que suplanta al de Menem se ve envuelto en la vorágine. Por incapacidad propia y por la insistencia en mantener el modelo económico, nunca puede superar los problemas estructurales: desocupación, pobreza, exclusión social. La crisis de representación política y el deterioro de la figura presidencial alimentan la imagen de un modelo decadente que pierde consenso casi a diario. Las protestas de diciembre de 2001 y la represión oficial marcan el paroxismo de un proceso de crisis social y política muy profunda para la Argentina.

La protesta social en sus diferentes formas no logra, sin embargo, traducirse en colectivo unificado. Como lo entiende Martín Retamozo, no deviene en sujeto político;

es decir, gana las calles, pero en forma desarticulada, y esto marca un límite para incorporar la lógica del movimiento político. Es indudable que las jornadas de diciembre generan condiciones para la repolitización del espacio público, con el desarrollo de asambleas que se forman bajo la consigna “que se vayan todos”. En ese sentido, dejan una impronta en el imaginario social más allá de que su influencia apenas logra superar el tiempo de la coyuntura, aunque algunas siguen operando durante un trecho más, logrando tener cierta influencia en nuevas jornadas de protesta en el año 2002, una vez instalado el gobierno provisional de Eduardo Duhalde.

Durante el interregno de Duhalde, los movimientos sociales optan por distintas estrategias de acción social y política frente al Estado. Algunos aceptan incorporarse a la propuesta del gobierno de crear el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado, que supone un ingreso mínimo para paliar los efectos de la crisis. Otros, como el caso de la agrupación Aníbal Verón o el Polo Obrero, redoblan su actitud de enfrentamiento con nuevas movilizaciones callejeras. En uno de estos cortes de rutas, el 26 de junio de 2002 son asesinados por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dos jóvenes manifestantes: Darío Santillán y Maximiliano Kosteky. Como respuesta, se produce una nueva ola de protestas que promueven la articulación de los diferentes sectores -la CTA, los organismos de derechos humanos, las asambleas barriales y el movimiento estudiantil- que fuerza a una convocatoria a elecciones presidenciales para marzo de 2003.

A partir de 2003, y luego de elecciones en las cuales Néstor Kirchner triunfa con el 22% de los votos, las expectativas que se abren son muchas. El gobierno de Kirchner al asumir elabora un discurso que apunta a recomponer la política como articuladora entre Estado y sociedad. Las premisas son garantizar el rol del Estado como asignador de recursos sociales y permitir la gobernabilidad recomponiendo las bases del sistema

representativo, tan desgastado con la crisis política. De esa manera, encuentra una forma de vincular las demandas de algunos movimientos sociales que quedaron adheridos al proyecto que elaboraba el Ejecutivo, a través de vehicular un proyecto político antineoliberal, de raíz “nacional-popular”. Así, logra atraer a algunos movimientos a la lógica política gubernamental y crear otros afines al proyecto kirchnerista.

Sin embargo, algunos sectores del movimiento de desocupados –por ejemplo, la nueva organización Darío Santillán– o del sector sindical –una fracción de la CTA– mantienen una postura crítica frente al gobierno.

El gobierno kirchnerista establece un conjunto de políticas públicas que permiten reconfigurar el campo de las relaciones sociales. Una serie de medidas que apuntan a revitalizar el funcionamiento del mercado de trabajo y la recuperación de los índices de empleo. De este modo, intenta responder a la demanda del movimiento de desocupados promoviendo el trabajo registrado y organizando la fuerza laboral del movimiento por medio de las cooperativas, especialmente gestionadas por organizaciones afines al gobierno.

Ante la demanda del movimiento de empresas recuperadas, ya en 2002 se modifica el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebra, que contempla el pedido por parte de los trabajadores reunidos en cooperativas de la continuidad de la actividad laboral. En 2004, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pone en funcionamiento el Programa de Trabajo Autogestionado y firma convenios con varias de las empresas recuperadas. Silvia L. Rodríguez afirma que el gobierno de Kirchner colaboró en darles la estabilidad jurídica que les faltaba. En la actualidad se puede hablar de la existencia de unas 270 fábricas recuperadas en todo el país, lo que le otorga al movimiento mayor legitimidad en su acción, basada en una forma de organización horizontal en la toma

de decisiones. Además, logran cierto formato jurídico para la continuidad de su funcionamiento, sostenido en el apoyo estatal. A su vez, constituyen al día de hoy una forma embrionaria en la que la fuerza de trabajo avanza sobre la propiedad de los medios de producción.

El gobierno de Kirchner mantiene en estos años una activa política ante la demanda de los organismos de derechos humanos respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una forma es avalando la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como la recuperación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención, lo que le permite el apoyo de notables personalidades del campo de los derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y las referentes de Madres de Plaza de Mayo en sus dos vertientes: Hebe de Bonafini y Taty Almeida.

Entre los nuevos movimientos sociales debemos incluir a los que surgen en defensa del medio ambiente, como los conformados en repudio a los daños producidos por el desarrollo de ciertos modelos productivos en diversos lugares del país. Uno de ellos es el movimiento de protesta frente al avance de la minería a cielo abierto que tiene su epicentro en el pueblo de Esquel,¹ en el nordeste de la provincia de Chubut, en el año 2003, así como en la provincia de Río Negro en el año 2005. En enero de 2012, el rechazo a la megaminería dice presente en cuatro provincias: Chubut, La Rioja, Catamarca y Río Negro, donde se producen movilizaciones de repudio a la actividad

¹ Esquel marcó un quiebre respecto de la acción que las comunidades tomaron frente al avance de empresas mineras. En 2002 se instaló la compañía canadiense Meridian Gold, que pretendía explotar el proyecto Cordón de Esquel para extraer oro y plata a sólo seis kilómetros de la ciudad. Movilizaciones, jornadas informativas y un histórico plebiscito rechazaron la megaminería. También lograron la sanción de la Ley N° 5.001, que prohíbe la actividad en la provincia. Sin embargo, las empresas extranjeras siguieron explorando el centro de la provincia, con el fin de extraer plomo y plata (proyecto llamado Navidad).

Las comunidades indígenas (mapuche y tehuelche), que cuentan con leyes específicas sobre el territorio, rechazan las actividades mineras y han participado de las movilizaciones junto a asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo, localidades vecinas a Esquel.

extractiva, que en las cuatro provincias cuenta con el apoyo de los gobiernos provinciales.

Otro ejemplo lo tenemos con las asambleas que actúan en repudio a las empresas papeleras que se instalan en las costas uruguayas, más precisamente en la ciudad de Fray Bentos, contaminando el Río Uruguay. El principal foco de protestas se ubica en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos), y su forma de acción es el prolongado corte del paso Argentina-Uruguay. Estos cortes, profusamente difundidos a nivel de los medios de comunicación, permiten la visibilización del reclamo y la intervención de los gobiernos de Argentina y Uruguay para intentar resolver el problema a través de acuerdos bilaterales. La duración e intensidad que adquiere el conflicto obligan al gobierno argentino a llevar esta cuestión a los tribunales internacionales, con el resultado de que una de las empresas involucradas en las denuncias de los asambleístas desiste de ubicarse en el país vecino.

Estos movimientos en defensa del medio ambiente incluyen en sus demandas una serie de protestas contra el modelo productivo extractivista, concebido en base a los denominados agronegocios, a la renta minera y a la explotación de yacimientos no convencionales.

Un balance general de la actuación de las organizaciones ambientalistas que actúan en contra de la minería a cielo abierto permite decir que sus logros han sido parciales, y a veces sólo acotados al ámbito local, sin lograr una articulación a nivel nacional, lo que en cierta forma marca las limitaciones de su accionar. Aunque es posible que en algunas zonas se ponga freno a la minería a cielo abierto, y en otras siga operando pero con algunas modificaciones en las formas de explotación, no ocurre lo mismo en provincias donde la renta minera es prioridad y es sostenida por las políticas oficiales, que actúan de escudo frente a las demandas de los ambientalistas.

En este contexto, y frente a la aparición de otras formas de explotación de recursos naturales, se han abierto nuevos interrogantes respecto del posible daño irreversible al medioambiente. La reacción al método de fractura –yacimientos no convencionales–, propiciado por un grupo de empresas que esperan aprovechar las reservas de shale gas, ha tenido avances limitados, debido a que sólo se prohibió en determinadas ciudades, sin vislumbrarse cambios a nivel nacional.

La política kirchnerista y sus consecuencias para el movimiento social

A partir de 2003, los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ponen en vigencia una serie de políticas públicas que en cierta forma son la respuesta a algunas de las demandas de los movimientos sociales. Con la inclusión en el gobierno de algunos de sus representantes y la firme decisión de no reprimir la protesta social, el proyecto kirchnerista conduce el proceso social desde el conflicto pleno hacia “aguas más calmas”.

Por otro lado, con la aplicación de un modelo productivo que permite recuperar la actividad económica, se logra una importante reactivación del empleo –ya sea precario o estable–, lo que le da mayor participación al sector sindical a través de las paritarias, que toman nuevamente fuerza como espacio de negociación. Al mismo tiempo, va perdiendo significación el movimiento piquetero, al disminuir su capacidad de movilización y enfrentamiento con el Estado.

El gobierno kirchnerista busca restablecer el lugar central del Estado articulando un modelo de acumulación y un régimen político que le permite encontrar respuestas institucionales a las demandas de los movimientos sociales. El Estado se transforma en

un “canal” por donde estas circulan y se expresan. Según Retamozo, el kirchnerismo procura interpelar a las organizaciones sociales no por medio de la búsqueda de su disolución, sino por medio de la recanalización de los modos de participación. Los movimientos sociales kirchneristas asumen formas más institucionalizadas –varios cuadros pasan a ser funcionarios– y también incorporan políticas novedosas, para cuya concreción son clave los activistas jóvenes. De este modo, un conjunto de organizaciones evalúa la posibilidad de formar parte del “movimiento nacional-popular” bajo la conducción de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque esto signifique resignar grados de autonomía.

Así como este gobierno va articulando demandas a favor de la búsqueda de consenso con algunas organizaciones, las protestas que otras protagonizan propician un nuevo campo de confrontación y antagonismo contra el Estado. El surgimiento y la consolidación en estos últimos diez años del proyecto kirchnerista provoca la constitución de un campo de oposición en el que se encuentran demandas de agrupaciones de izquierda, así como de un nuevo bloque de fuerzas conservadoras, denominadas por algunos analistas como “nueva derecha” argentina.

Entre las primeras podemos destacar las que exigen cambios más profundos en la distribución del ingreso –sectores de la CTA, CGT moyanista, sindicalismo liderado por organizaciones de izquierda como el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores y el Socialismo–, y las que demandan la finalización del modelo económico por considerarlo basado en la depredación de los recursos naturales. Muchas critican el carácter imperialista y extranjerizante del modelo productivo bajo explotación de grandes capitales nacionales y extranjeros. Entre ellas podemos citar al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y al Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR). Estas protestas enfrentan el avance del monocultivo de soja y la

deforestación propiciada por el avance de la superficie sembrada en detrimento del pequeño campesino y de las comunidades indígenas.

Una nueva forma de oposición: los movimientos sociales conservadores

También se oponen al kirchnerismo organizaciones que podemos ubicar en los emergentes de una “nueva derecha” argentina, que, si bien no presentan carácter orgánico partidario, reciben el apoyo de un sector social acomodado y la difusión de sus demandas por parte de importantes medios de comunicación del país.

A partir de 2008, en un contexto general de reducción de los niveles de crecimiento de la economía argentina, se inicia un ciclo de protestas protagonizadas por sectores del empresariado rural a través de las cuatro entidades agropecuarias que los nuclea. El principal reclamo es contra la elevación de la alícuota a las retenciones para la exportación de soja, girasol, maíz y trigo (Resolución N° 125/08). El conflicto dura varios meses y es profusamente difundido por los medios de comunicación. Tras una dura lucha política y mediática, el gobierno no puede aplicar la medida enviada al Congreso Nacional. Los empresarios del sector adquieren mucha visibilidad mediática, lo que les permite desarrollar una unidad de acción que nunca antes han tenido.

Por otra parte, aparece un movimiento constituido para bregar por la “seguridad ciudadana”, cuya principal figura es Juan Carlos Blumberg, que en 2004 organiza marchas con decenas de miles de asistentes y solicita, entre otras medidas, el endurecimiento de las penas, la baja de la edad para establecer la imputabilidad de los menores y mayores atribuciones para la policía. Otros grupos de esa “nueva derecha” son las organizaciones que reivindican la actuación de los militares en la última

dictadura militar y solicitan el fin de los juicios por lo que denominan una persecución política. Mantienen su postura de condenar a los “terroristas de ayer”, incluyendo en su demanda a funcionarios del actual gobierno.

A modo de cierre

Los movimientos que acabamos de describir son de alguna forma el producto de la creación de nuevas identidades colectivas, constituidas al calor del rechazo o la resistencia a la aplicación de políticas de desestructuración social gestadas por el neoliberalismo desde los años noventa. Son también formas de organización que retoman cierta tradición, pero que podemos caracterizar como novedosas en este contexto, sobre todo por llevar adelante reivindicaciones de inclusión social y transformación del Estado, pero sin cuestionar la existencia de la nación como marco jurídico-político.

Es posible afirmar que el advenimiento de esta “nueva ciudadanía”, que busca formas de expresión por canales no convencionales, es la consecuencia de un proceso de desinstitucionalización que se profundiza en los años noventa, provocando el debilitamiento de los lazos organizacionales y de las identidades adscriptas dentro de formas institucionalizadas. También es una crisis de la “voluntad política” de cambio que experimentan algunas organizaciones populares –partidos políticos tradicionales, como la UCR y el PJ– que perdieron gran parte de su credibilidad y legitimidad por su forma de actuación. Los discursos de los movimientos sociales surgen como alternativa tanto a la intervención estatal –también en crisis– como a las regulaciones públicas, que a su vez tienen su correlato en la idea de sustitución de la política por la administración

gubernamental a través de los tecnócratas, que han adquirido poder durante los años noventa: la tecnocracia ha sustituido a la política y puesto en tela de juicio la relación entre representantes y representados.

La reacción contra los partidos políticos tradicionales y la tecnocracia tiene su momento culminante en los acontecimientos de diciembre de 2001, y es capaz de articular un nuevo vínculo entre política y sociedad civil que deja una marca, una impronta en la memoria social y una forma de acción –cortes de rutas, piquetes, asambleas– que alimenta el repertorio de la protesta social y la resistencia, particularmente respecto de las políticas estatales.

Sin embargo, el balance de los resultados logrados por los diferentes movimientos sociales muestra elementos contrapuestos. Por un lado, con el planteo de “que se vayan todos” de las asambleas barriales, que propicia el fin de un sistema político basado en la representación, se logra cierto desplazamiento de algunas figuras de la política tradicional, pero el sistema no se modifica sustancialmente –aunque es necesario reconocer que a partir de 2001 mucho ha cambiado en la relación entre política y sociedad en la Argentina–. En los últimos años, la política vuelve a ocupar un lugar central, al ser rehabilitada como espacio de negociación-confrontación y como herramienta de transformación social. La pregunta que es necesario hacerse es cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en la recuperación de la política. Evidentemente, el surgimiento de estas nuevas formas de acción colectiva ha tenido un impacto formidable, al actuar como dinamizadoras de la práctica política, demostrando cómo, a través de la actuación en ámbitos públicos, no sólo fue posible su visibilización, sino la generación de un fuerte cuestionamiento al sistema de representación política, sobre la que se basa el modelo demoliberal argentino. Su principal fortaleza ha sido el desarrollo de su capacidad de resistencia y su

potencialidad como factor contestatario del orden social, aunque quizás podría decirse que ha demostrado cierta debilidad para transformarse en una opción política articulada.

El proyecto político del kirchnerismo se fue desarrollando bajo esas condiciones de oportunidad, vehiculizando el conflicto social y la energía que la protesta de los movimientos sociales provocaba, creando lazos institucionales que permitieron tejer una estructura política basada en la inclusión de muchas de las demandas que habían encontrado visibilidad a partir de la acción de los nuevos movimientos. Esto le permitió reconducir la política argentina y direccionar el conflicto, reubicando al Estado en un papel central en la asignación de recursos.

A través de un discurso basado en las premisas del “proyecto nacional y popular”, tan caro al pensamiento tributario de la tradición peronista, el kirchnerismo pudo establecer un nexo más sólido entre política y sociedad.

Los movimientos sociales argentinos han desarrollado una identidad muy rica como fuerza contestataria. También como fuerza creativa, a partir de experiencias basadas en la autogestión y la autoorganización, incluso con formas embrionarias de autogobierno. Todavía resta saber cuál es su verdadera capacidad para convertirse en fuerza política capaz de disputar instancias de poder.

Es necesario destacar el accionar de la “nueva derecha” conservadora que desde 2008 viene ocupando un espacio mayor como fuerza opositora al proyecto kirchnerista. Su fuerza radica en el uso de ciertos aparatos discursivos que encuentran canales de expresión tanto en la prensa –también opositora– como en algunos partidos políticos y hasta en la propia Iglesia católica. Estas expresiones han demostrado cierta virulencia en la acción y también han encontrado formas de expresión ocupando el espacio público a través de resonantes manifestaciones callejeras.

Finalmente, debemos reflexionar sobre el potencial liberador y la promesa emancipatoria que los nuevos movimientos sociales promueven a partir de su emergencia. Tanto los que están dentro como fuera del gobierno en la Argentina actual tienen un lugar clave en la disputa ideológica y en la lucha política, y muestran la capacidad de constituir fuerzas con una energía transformadora del orden social. Esta capacidad transformadora se inscribe en un proceso que excede el campo de acción social de la Argentina, y presupone una proyección hacia experiencias similares en el continente. El tiempo mostrará sus alcances y limitaciones, particularmente con la emergencia de un nuevo gobierno, esta vez de clara filiación de derechas, a partir del triunfo de la coalición Cambiemos en el año 2015.

Bibliografía

Klachko, Paula (2002). "La conflictividad social en la Argentina de los '90: el caso de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul (1996-1997)". En: Levy, Bettina (comp.). *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO.

Pacheco, Mariano (2008). *De Cutral Co a Puente Pueyrredón. Una genealogía de los Movimientos sociales*. Buenos Aires: El Colectivo.

Retamozo, Martín (2012). *Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina*. Disponible en: <https://polis.revues.org/1249>.

Rodríguez, Silvia Laura (2013). *Los movimientos sociales en la Argentina a partir de la década del 90*. Ponencia presentada en "XVIII Encuentro Nacional de Economía Política" organizado por la Sociedad Brasileira de Economía Política. Disponible en: <http://www.madres.org/documentos/doc20130716150520.pdf>.

Svampa, Maristella (2002). *Movimientos sociales en la Argentina de hoy. Piquetes y Asambleas. Tres estudios de casos.* Disponible en: <http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo07.pdf>.

-- (2011). "Movimientos piqueteros, 2001-2011. Del centro político al retorno al barrio". En: *Le Monde Diplomatique*, año XIII, N° 150.

Palomino, Héctor (2003). "Las experiencias actuales de autogestión en Argentina". En: *Nueva Sociedad*, N° 184.

Solana, Pablo (2011). "2001-2011: las dimensiones de la rebelión al calor de la experiencia de los movimientos barrales y de trabajador@ desocupad@s". En: *Herramienta*, N° 46.

Resistencias al neoliberalismo en América Latina: Estados y recuperación económica en el siglo XXI

Por Carlos M. Ciappina

De la larga lista de conceptualizaciones sobre lo que América Latina “debería ser”, podemos señalar que han sido hegemónicas aquellas que se han constituido desde la perspectiva que toma como patrón social, cultural y económico a sociedades que son marcadamente diferentes en términos de construcción social, intereses económicos y experiencias históricas: la europea y la norteamericana.

La pregunta por Latinoamérica y sus modos de ser se halló siempre sesgada por la “mirada del otro”,² como si nuestro “éxito” como sociedad estuviera relacionado directamente con el cumplimiento de los patrones económico-sociales de “la civilización”, “Europa y el mundo anglosajón” y, en las versiones más aggiornadas, “el Centro Desarrollado”.³

Las perspectivas sobre el deber ser latinoamericano se han desplegado desde esta lógicas “en exterioridad”: desde los estudios europeos y norteamericanos de las décadas de 1920-1930 relativos a explicar las dificultades para la “democracia” en América Latina –con asociaciones y prejuicios variados vinculados a cuestiones raciales, religiosas, climáticas o culturales–, pasando por las perspectivas desarrollistas que luego de la Segunda Guerra Mundial pusieron el acento en la situación de “atraso relativo” –vinculado a las estructuras agrarias latifundistas, los patrones familiares, las

² Wallerstein, Immanuel (2006). *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*. Madrid: Siglo XXI.

³ Feinmann, José Pablo (2008). *La filosofía y el barro de la historia*. Buenos Aires: Planeta.

carencias educativas y de salud-,⁴ hasta las conceptualizaciones relativas a la necesidad de sumarse a la globalización fundiéndose en la misma bajo el paradigma neoliberal.

Frente a estas propuestas –que son analíticas y prospectivas– las tradiciones nacional-populares de las décadas del cuarenta y cincuenta proponían una estrategia basada en la crítica a la teoría liberal y a la práctica de un Estado desentendido de la búsqueda de mayores grados de autonomía económica y de niveles de bienestar social. La mirada de la Teoría de la Dependencia señaló a su vez los aspectos distorsivos que la economía central tenía sobre las posibilidades de un desarrollo “a la europea”.⁵

Finalmente –y no menos importante, aunque menos presente–, en particular a partir de la experiencia cubana y chilena –en diversos formatos y modalidades–, la posibilidad de un modelo socialista “a la latinoamericana” se volvió tema de discusión y debate –y, por supuesto, de práctica– en los años sesenta y setenta del siglo pasado.⁶

Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la emergencia de procesos políticos de carácter democrático y popular se asienta en una propuesta que, con sus matices, intenta desplegar un proyecto de crecimiento económico, inclusión social e integración regional que tiene una fuerte impronta latinoamericana. Esta reconfiguración tiene como eje articulador/orientador el reempoderamiento del Estado nacional.

En lo que sigue, tenemos como objetivo señalar las ventajas y potencialidades del modo de reconfiguración en el vínculo entre Estado, economía y sociedad en América Latina a partir de la crisis neoliberal de fines del siglo XX y las experiencias nacionales de inicios del siglo XXI.

⁴ Skidmore, Thomas y Peter Smith (2005). *Historia contemporánea de América Latina*. Barcelona: Crítica.

⁵ Argumedo, Alcira (2004). *Los silencios y las voces en América Latina*. Buenos Aires: Colihue. Dos Santos, Theotônio (2003). *La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas*. Buenos Aires: Plaza & Janés.

⁶ Fernández Nadal, Estela (comp.) (2001). *Itinerarios socialistas en América Latina*. Córdoba: Alción.

La lógica interpretativa que presentamos postula que la reconfiguración de la relación entre Estado, sociedad y economía adquirió en América Latina la forma de una nueva experiencia originada en nuestras sociedades. Esa condición “propia” se explica por la confluencia de las tradiciones de resistencia a las políticas económicas de la ortodoxia liberal de las dos últimas décadas del siglo XX, por las experiencias de gobiernos nacional-populares de mediados de ese siglo y por la novedad de experiencias políticas de corte profundamente democrático que desde la gestión Estatal recuperaron esas tradiciones y las renovaron y actualizaron en el contexto de una economía universalizada, transnacionalizada y deslocalizada.⁷ También señalamos que esta reconfiguración es, sobre todo, una elección política que toma en cuenta el contexto internacional en forma relativa, habida cuenta de que la situación internacional varió a partir de la crisis de la economía europea y norteamericana de 2008,⁸ pero no así la línea estratégica de la reconstrucción y reconfiguración estatal en América Latina.

Partimos de la idea de que las modalidades que adquiere el Estado en la gestión pública tienen que ver con el modo en que se articula con la economía y la sociedad en una sola matriz. Así, la forma, las funciones y el perfil que la política –en el modo de representación al hacerse cargo del gobierno– le da al Estado definen los rasgos que la matriz social adquiere. Proponemos tres casos emblemáticos en este sentido: Bolivia, Ecuador y Argentina.

⁷ García Delgado, Daniel (1998). *Estado-nación y globalización*. Buenos Aires: Ariel.

⁸ Boron, Atilio (2012). “Crisis capitalista y miseria del pensamiento económico burgués”. En: *Batalla de ideas*, N° 3. Revista del Instituto de Política Económica. Buenos Aires.

El derrumbe neoliberal y su impacto en América Latina

Las llamadas reformas neoliberales en América Latina surgieron en un contexto de reconfiguración económica a partir de la crisis de la deuda de 1982.⁹ Lo que ha sido llamado el agotamiento del modelo estadocéntrico en América Latina no fue sino la combinación de una crisis presupuestaria originada en una dimensión “impagable” de la deuda y la imposibilidad de los gobiernos latinoamericanos de generar un proyecto político que diagnosticara claramente las raíces de esa crisis.

En ese contexto de incapacidad de definición política, cobraron primacía las perspectivas ortodoxas, las cuales se pueden resumir en tres ejes de ejecución: apertura de la economía, privatizaciones y reformulación del Estado.

El primer eje fue presentado como una alternativa que modernizaría la economía vía el ingreso de tecnología y que abarataría los precios vía un funcionamiento virtuoso del mercado internacional, que proveería bienes a bajo costo. La realidad era muy otra: se habilitaba un esquema económico de extremada inequidad entre grandes corporaciones de carácter transnacional compitiendo con pequeñas y medianas empresas nacionales, desarticulando el largo proceso de construcción de una economía que buscaba integración vertical y horizontal.

Las privatizaciones fueron presentadas como la panacea para la mejora en el funcionamiento de servicios y empresas que fracasaban porque estaban en manos del Estado. La transferencia de activos –en muchos casos, con décadas de acumulación social en materia económica, simbólica y de recursos humanos– se justificaba por un principio mítico: la gestión estatal era en sí incapaz. La reformulación del Estado

⁹ Toussaint, Éric (2002). *Deuda Externa en el Tercer Mundo. Las finanzas contra los pueblos*. Disponible en: <http://www.cadtm.org/Deuda-externa-en-el-Tercer-Mundo>.

adquirió la forma de una enorme operación de reducción y redireccionamiento, de modificación de sus áreas de interés y capacidades de gestión.

Las reformas planteadas desde esta perspectiva política se basaron, pues, en una presencia potente del Estado, que fue quien operativizó los tres niveles arriba señalados. Lejos de la interpretación sobre un “retiro” del Estado, las reformas neoliberales se hicieron bajo una fuerte “presencia” estatal que fue –otra vez– el actor clave en dicho proceso, aunque en su fundamentación discursiva se hablaba de una “democracia de mercado”.

La construcción política de un Estado débil y la paradoja del éxito de su debilidad

Cuando se analizan las políticas estatales desarrolladas bajo el paradigma del neoliberalismo, no encontramos sino un vasto proceso de construcción política del Estado “ausente”. Esta tarea, que –recordémoslo bien– estuvo a cargo de las expresiones de la política, tuvo varios principios y acciones:

El proceso privatizador no se limitó solamente a la transferencia de activos físicos (bienes públicos) y servicios que prestaba el Estado, sino que se transfirieron también facultades de conducción política y de gestión. Este desprendimiento de facultades de planificación, diseño, conducción y gestión involucró las capacidades de conducir la macroeconomía, planificar proyectos de infraestructura, preservación del medioambiente y potenciación del desarrollo científico.

Una traslación de la actividad política, que delegaba en las empresas y organismos transnacionales su rol conductor de los destinos socioeconómicos bajo la premisa de que el papel de la política era generar las condiciones institucionales para el mejor

despliegue del mercado. La política debía apoyarse en la técnica y, sobre todo, en los técnicos que poseían los instrumentos para conducir la vida económica.

El diagnóstico neoliberal de una transterritorialidad que la globalización llevaba a su extremo inevitable tenía como consecuencia una presunción de agotamiento de la base territorial del Estado nacional y de la inevitabilidad de una nueva dimensión técnica de conducción estatal asentada en los organismos internacionales, con la progresiva adecuación de las instituciones públicas a esa necesidad. Esta perspectiva desligaba además al Estado del soporte de los actores sociales y a las políticas públicas de su representación social tradicional.

Incorporación del Estado a un entramado internacional que fortalecía la despolitización nacional de la gestión pública:

La incorporación a los organismos financieros internacionales creados en la Segunda Posguerra -Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial- implicó la puesta en práctica de una política financiera que descansaba en última instancia en la Secretaría del Tesoro norteamericana y en el patrón de la moneda estadounidense.

La escisión entre los Bancos Centrales y la Administración del Estado condujo a la vinculación directa de la autoridad monetaria con el FMI y el Tesoro norteamericano, quienes definían la política monetaria de los países.

La delegación de atribuciones judiciales a organismos transnacionales (CIADI) y aun a jurisdicciones legales extranjeras -sistema judicial norteamericano o europeo- redujo la capacidad soberana nacional en la definición de los litigios de carácter económico-financiero con las empresas extranjeras.

No es menor el rol jugado por el conglomerado comunicacional global en la generación de argumentos, climas y mentalidades que facilitaron la aceptación de este vasto

proceso de desarticulación y rearticulación político-estatal a favor del modelo neoliberal.

Un breve análisis de las experiencias de la Argentina, Bolivia y Ecuador da una dimensión empírica a lo que señalamos arriba.

Argentina

La crisis de la deuda que asoló a América Latina en 1982-1983 encontró a la Argentina con una dictadura militar en descomposición, con una política de apertura externa y financierización de la economía que se combinó con el costo presupuestario de la Guerra de las Malvinas y llevó a que la situación socioeconómica de “la transición” –el período que se inicia con Raúl Alfonsín en 1983– fuera extremadamente débil. Los intentos por reconstruir un Estado con capacidades para redireccionar la economía –en el frente interno y externo– se vieron debilitados cada vez más.

La crisis presupuestaria, monetaria y de endeudamiento recrudesció en 1988-1989, y no sólo llevó a dos hiperinflaciones y la retirada anticipada del gobierno radical, sino a una reconfiguración profunda del “sentido común” sobre los modos de ser del Estado y las políticas públicas que debían llevarse a cabo. En ese contexto, el llamado a elecciones anticipadas le dio el triunfo a Carlos S. Menem, quien llegó al gobierno con un programa apoyado por las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, los organismos multilaterales de crédito (FMI y Banco Mundial) y los grandes grupos mediáticos monopólicos. Este apoyo le dio margen económico-político y mediático-cultural para llevar adelante el mayor proceso de desestructuración de las capacidades estatales para sostener empresas y organismos públicos, áreas completas de los

recursos naturales y políticas de sostén de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad social, etcétera.

Así, desde el Estado –y con el apoyo de los factores de poder interiores y exteriores– se llevó a cabo un vasto programa de ajuste socioeconómico que tomó por nombre el de la convertibilidad y por práctica las privatizaciones y desregulaciones económicas y laborales, y el crecimiento del endeudamiento externo.

Esta situación de reconversión neoliberal funcionó mientras el Estado pudo desprenderse de activos que sostuvieron el incremento de los servicios de deuda para mantener la paridad, y comenzó a resquebrajarse cuando se combinaron la crisis externa (Efecto Tequila) de 1995 con el fin del período más álgido de las privatizaciones.

A partir de 1996, la convertibilidad y las reformas neoliberales requirieron de un nivel mayor de endeudamiento y de reajustes permanentes del presupuesto estatal para malmantenerse. El recambio del año 1999 –con el acceso al poder de una alianza constituida por el partido radical y una coalición progresista– no se planteó la reformulación del plan de reformas neoliberales previo y, menos aun, la salida de la convertibilidad. La crisis desatada en el año 2001 mostró los límites hasta los que la aplicación del canon neoliberal podía llevar al Estado y la nación. La devaluación, la captura de depósitos, la crisis fiscal, la crisis de pagos internos y externos, junto con la profundización de indicadores de pobreza y desempleo, confluyeron en un colapso económico absoluto y en una reacción de trabajadores desempleados, trabajadores empleados, pobres, indigentes, sectores medios bajos y medios, que terminó con el gobierno de De la Rúa y abrió un período de inestabilidad política entre 2001 y 2003.

El gobierno surgido en el año 2003, con el apoyo de apenas el 23% de los votantes, modificó radicalmente la perspectiva sobre el rol del Estado y su vinculación con las

variables centrales de la economía y la sociedad. Reconstrucción estatal, desendeudamiento externo, creación del empleo, reestatización de empresas y de activos jubilatorios, ampliación del salario, planes universales de ingreso, planes masivos de construcción de viviendas, incremento de carga impositiva a los sectores concentrados -vía retención a las exportaciones con súper renta-, comenzaron a redefinir las principales variables de la economía y, por lo tanto, de los recursos del Estado en términos presupuestarios y de reasignación a las áreas de educación, salud, planes sociales y jubilaciones.

Así damos cuenta brevemente de que en ambos procesos, el neoliberal y el de reconstrucción de un Estado nacional-popular, es el mismo Estado la clave interpretativa y la principal herramienta para modificar las pautas de la matriz social. El siguiente cuadro muestra algunos indicadores relevantes y su alteración a partir de la modificación de los patrones de funcionamiento del Estado en Argentina.

Argentina. Evolución de los indicadores socioeconómicos (1995-2014)

Año	PBI (en millones de dólares)*	Mortalidad infantil	Pobreza	Indigencia	Deuda externa (en millones de dólares)	Deuda externa (en % del PBI)	Desempleo
1995	244.500	22,2%	26,7% (1996)	6,5%	87.091	56,5%	16,6%
2002	240.400	16,8%	41,40%	20%	171.198	164,2%	17,1%
2003	268.561	14,92%	42,6%	19%	178.195	135,4%	17,3%
2010	425.000	11,9%	9,9%	3,1%	118.400	48,5%	7,9%
2012	442.000	11,7% (2011)	6%	1,5%	136.800	39,1%	6,9%
2014	450.000 (estimado)	9,6% (2013)			80.314	18%	6,8% (2013)

* Según datos del INDEC.

Bolivia

El caso boliviano, con sus particularidades, no varía sustancialmente del argentino. La dictadura boliviana –apoyada por la dictadura argentina– finaliza en 1982 con una situación económica de extrema debilidad: alta deuda externa e hiperinflación.

El primer gobierno posdictadura, al mando de Hernán Siles Zuazo, no logró revertir la crisis económica hiperinflacionaria heredada y, en medio de una crisis política resultado de la misma, debió –como en el caso argentino– adelantar las elecciones.

El gobierno del histórico líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) Víctor Paz Estenssoro inició en 1985 la política neoliberal que culminaría con la crisis del período 2003-2006.

Paz Estenssoro estableció por medio del Decreto Supremo N° 21.060 un programa de fijación del peso boliviano al dólar, con apertura económica al exterior, congelamiento de salarios, despido del 10% de la Administración pública y acuerdos de toma de deuda con organismos internacionales.

En 1989 resultó electo presidente Jaime Paz Zamora. Pese a provenir del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), profundizó las medidas de carácter neoliberal, especialmente los acuerdos con los organismos internacionales de crédito, que le permitieron sostener la llamada Nueva Política Económica y controlar así la inflación. El período de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, se caracterizaría por cierta reforma social y política -Ley de Participación Popular, Ley de delimitación de Territorios Comunitarios de Origen, Seguro Materno Infantil, figura del Defensor del Pueblo- combinada con la profundización de las medidas neoliberales en economía, en especial el famoso programa de Capitalización de empresas públicas, que era en realidad un vasto programa de privatización a partir de la venta del 50% de las empresas estatales a capitales privados: Ferrocarriles Bolivianos, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, Empresa de Telecomunicaciones, Empresa Nacional de Electricidad y Empresa de Aviación Boliviana.

Las privatizaciones a gran escala comenzaron a generar resistencias profundas, y, electo el exdictador Hugo Bánzer Suárez para el período 1997-2001, su política de destrucción de los cultivos de coca y de privatización del servicio de agua culminará en la denominada Guerra del Agua del año 2000 y en una inestabilidad política creciente.

Entre 2002 y 2006 se sucedieron los gobiernos de Jorge Quiroga Ramírez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé, sostenidos todos centralmente por el apoyo de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial a cambio de profundizar las medidas neoliberales, y con una resistencia cada vez más masiva por parte de los sindicatos mineros y cocaleros y los movimientos sociales.

La elección de Evo Morales Ayma (2006), del Movimiento al Socialismo (MAS), significó un cambio rotundo en la política estatal. Durante el año 2006 se decretó el fin de la extracción descontrolada de productos mineros en Bolivia –decreto denominado Héroes del Chaco–. Se estatizaron así todos los recursos petroleros del país, obligando a las empresas privadas a iniciar además un proceso de cooperación con la empresa estatal boliviana –que debía tener al menos el 50% de las acciones de cada compañía privada–. Ese mismo año se estatizó la mina de estaño de Huanuni.

Durante el año 2007 se reestatizó la Empresa Metalúrgica Vinto y la empresa de agua de La Paz. En 2008 se nacionalizó la empresa de telecomunicaciones –en manos de Telecom– y se compraron las acciones de Hidrocarburos Boliviana, el 50% de la empresa petrolera Andina –en manos de Repsol–, el 51% de las acciones de la empresa Chaco de Hidrocarburos –en manos de British Petroleum– y el 50% de la distribuidora de combustibles Transredes –de capital británico–. En mayo de 2010, la totalidad de las acciones de la empresa abastecedora de combustible a los aviones fue estatizada. En el año 2012 se nacionalizó la empresa de electricidad de Bolivia.

Bolivia. Principales datos socioeconómicos (1995-2013)

Año	PBI (en bolivianos a valor 1990)*	Mortalidad infantil	Pobreza	Indigencia	Deuda externa (en millones de dólares)**	Deuda externa (en % del PBI)***	Desempleo
1995	17.252.382	75%			4.791	71,5%	4%
2002	21.265.795	66%	62,4%	37,1%	4.300	54%	9%
2005	23.534.090	53%	54%	31,2%	7.766	52%	4%
2013	34.051.267	40%	40%	21,4%	5.262	17,7%	3,5%

* Según datos del Instituto Estadístico de Bolivia.

** Según datos del Banco Central de Bolivia.

*** Según datos de CEPAL.

Ecuador

Durante la década de 1990, siguiendo con las políticas del Consenso de Washington, Ecuador tuvo una serie de gobiernos que llevaron adelante una política de apertura externa, toma de créditos en el exterior y dolarización de la economía.

El período de Sixto Durán-Ballén (1992-1996) se caracterizará por la profundización de las medidas neoliberales. Sus propuestas incluyeron una profunda modernización del Estado –creando el Consejo de Modernización del Estado– con la imposición de un conjunto de medidas, como la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y las garantías para la inversión de capitales extranjeros; particularmente, la entrada en el Plan Brady y el apoyo de las organizaciones de crédito internacionales –en especial, el Banco Mundial–. Para tener un ejemplo de este apoyo, sólo durante 1995 se le otorgaron al Ecuador cuatro créditos del Banco Mundial.

También se modificaron las pautas de asociación de la empresa estatal petrolera con las de capital privado. Los contratos entregaban la mayoría de la rentabilidad de la explotación a las empresas privadas; los ingresos petroleros del Estado bajaron en este gobierno del 90% al 33%, incrementando la necesidad de tomar deuda para cubrir el déficit.

Estas medidas estaban ceñidas a las recomendaciones y condicionalidades del Banco Mundial: se flexibilizó la ley de empleo y se avanzó sobre la reducción de los alcances de la gratuidad en educación básica y salud pública.

El gobierno de Durán-Ballén sentó las bases para una permanente caída de las capacidades de funcionamiento del Estado ecuatoriano, una crisis presupuestaria saldada con toma de deuda y el consiguiente resquebrajamiento de las condiciones de gobernabilidad por la protesta social general e indígena.

La crisis política se inició con la destitución del presidente Abdalá Bucaram –electo en 1996 y destituido en 1997–, la asunción de Fabián Alarcón como presidente interino, y la elección de Jamil Mahuad en 1998, quien continuó con las políticas de ajuste y financierización, lo que culminó con su destitución en medio de una gravísima crisis financiera y social en el año 2000.

El mandato del presidente depuesto lo completó su vice, Gustavo Noboa, quien profundizó el ajuste y optó por completar la dolarización de la economía con el asesoramiento y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Durante su mandato dejó de circular el sucre, la moneda ecuatoriana que fue reemplazada por el dólar. También se privatizaron las compañías eléctricas y telefónicas que eran de propiedad estatal.

Las elecciones de 2002 le dieron el triunfo a Lucio Gutiérrez, quien con una amplia alianza de centroizquierda indigenista proponía revertir el despliegue de las políticas neoliberales. Al hacerse cargo del gobierno modificó drásticamente sus propuestas:

firmó una nueva Carta de Intención con el FMI, ajustó los postulados de su gobierno a este compromiso y abrió la participación del capital privado a la industria petrolera, eléctrica y, particularmente, a la seguridad social. Como con los presidentes anteriores, la política económica generó nueva inestabilidad política y Gutiérrez fue destituido en 2005.

La llegada al gobierno de Rafael Correa en el año 2006 modificó fuertemente el paradigma imperante. La sanción de una nueva Constitución le permitió un nuevo marco jurídico que avalara procesos de transformación estatal más profundos y, sobre todo, la inclusión de las cuestiones de diversidad étnica, de género y religiosa que estaban pendientes en el Ecuador. La política estatal se orientó hacia tres grandes ejes: planificación para el desarrollo, regulación y control de los sectores estratégicos de la economía, y distribución y redistribución de la riqueza. Se planteó una renegociación de la deuda externa que partiera de una auditoría integral para establecer cuál era la deuda legítima y cuál la ilegítima. Se desmanteló la legislación laboral “flexible” y hubo fuerte inversión en planes educativos y sociales de carácter masivo. Se eliminó el pago de matrícula en la educación básica pública y se invirtió en la construcción/refacción de escuelas y en la provisión de elementos de enseñanza gratuitos. En el año 2009 se creó un Sistema Nacional de Planificación, en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo a cargo del Consejo Nacional de Planificación.

Las principales variables de la macroeconomía y algunos indicadores sociales entre 1995 y 2013 señalan para Ecuador situaciones similares a las de Argentina y Bolivia: el punto de inflexión se da a partir de la decisión política de colocar al Estado nacional como punta de lanza para la transformación, dejando de lado las políticas de gestión neoliberales.

Ecuador. Principales datos socioeconómicos (1995-2013)

Año	PBI (en millones de dólares)	Mortalidad infantil	Pobreza	Indigencia	Deuda externa (en millones de dólares)	Deuda externa (en % del PBI)	Desempleo
1995	23.000	44%	55,9%	20%	13.934	77%	8%
1999	19.000	20%	45%	21%	13.372	114%	15%
2002	29.000	24%	40,9%	19,4%	16.233	52,5%	9%
2005	42.000	22%	37,6% (2006)	16,9% (2006)	17.008	35,02%	8,5%
2010	70.000	20%	32,8%	13,9%	16.207	19,17%	6,11%
2013	90.000	20%	32%	12,9%	17.374	14%	4,8%

Según datos de la CEPAL (2014).

La reconfiguración del Estado latinoamericano y su impacto como fundamento central en la construcción de una alternativa superadora a las políticas neoliberales

La crisis económica, social y política -integral- que generó el neoliberalismo en América Latina habilitó un proceso de rearticulación del Estado a partir de la reconfiguración de los roles de la política y de la aceptación de amplios sectores de las clases medias y populares de la necesidad de redefinir los alcances de la gestión estatal en relación con el paradigma del mercado como regulador de la vida social.

Consideramos que los principales ejes sobre los que se ha hecho posible esta recuperación de las capacidades estatales se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

La reconstrucción de la idea de lo “público” como “lo común” rescató antiguas tradiciones comunitarias (Bolivia, Ecuador) y de raigambre popular (Argentina, Venezuela). Esta recuperación de lo público como oposición al homo neoliberal – individual, despreocupado de lo social, maximizador de sus ventajas individuales– habilitó una recuperación del rol de lo político.

La política como expresión legítima de los colectivos sociales y su representación en la conducción del Estado es la base de sustento de la posibilidad de una recuperación del rol conductor-articulador del Estado nacional y aun regional/local.

La combinatoria de endeudamiento externo, jurisdicción legal extendida al exterior y encorsetamiento a la dinámica de los organismos financieros internacionales mostró sus limitaciones concretas y reales en las crisis neoliberales de Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La recuperación paulatina de la autonomía estatal en materia monetaria, judicial y financiera, redefiniendo el rol de los Bancos Centrales, buscando monedas alternativas al dólar y proponiendo la construcción de una Banca Latinoamericana, señalan un camino.

La recuperación selectiva del rol empresarial del Estado no se hizo sobre la base de un principio mítico –al estilo de las formulaciones neoliberales–, sino sobre la evaluación de la relevancia socioeconómica del área a estatizar y de la performance económica de las empresas privadas, medida desde el doble estándar de su contribución a la economía nacional y a su impacto concreto en la provisión de servicios o generación de bienes para la población en general.

Junto con la tradicional participación en la definición de políticas públicas de los sindicatos de América Latina, se ha venido desplegando una inclusión creciente de movimientos sociales tradicionalmente ausentes o reprimidos y organizaciones sociales desencuadradas del sindicalismo clásico.

Hay una búsqueda de articulaciones supraestatales que persiguen la ampliación de la autonomía en materia de políticas públicas de los países latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, ALBA, CELAC).

Obstáculos, límites y desafíos

Los obstáculos que siguen limitando las posibilidades de sostener este proceso de reconfiguración estatal son también relevantes:

La insistencia de los organismos del sistema financiero internacional en proponer recetas recesivas asentadas en estimaciones erróneas en relación con las expectativas del ciclo de recuperación económica basada en propuestas inclusivas, y su vocación por continuar monitoreando y controlando las políticas formuladas a nivel de los Estados nacionales latinoamericanos.

El peso y tamaño de la deuda externa y las dificultades que su reestructuración y pago les proponen a los Estados nacionales latinoamericanos. En particular, la judicialización externa de los canjes de deuda y sus amenazas a los procesos exitosos de reestructuración.

La profundidad de la desestructuración de las capacidades de gestión estatal en materia legal-institucional y la lentitud para reconstruir los mecanismos legales e institucionales requeridos para, dentro del sistema democrático, ampliar la eficacia de las políticas públicas.

Relacionado con el punto anterior, la pérdida de recursos humanos altamente capacitados y formados durante décadas, por las políticas de ajuste y reducción del

Estado, es un obstáculo que demanda tiempo para reconstruir y formar a nuevas generaciones de trabajadores, administradores, gerentes en el ámbito público.

La persistencia de una cultura hegemónica demonizadora de las capacidades públicas extendida en un sistema comunicacional-empresarial monopólico en América Latina, lo que en procesos de ampliación de la participación democrática tiene efectos desmovilizadores y de reconstrucción de alternativas políticas autoritarias y neoconservadoras.¹⁰

Los desafíos a futuro: democracia, procesos de inclusión y sostenibilidad económica

La emergencia de procesos democrático-populares que han logrado una fuerte recuperación de las principales variables de la economía con mejora en las condiciones de vida y políticas de inclusión social a partir de la crisis neoliberal de fines del siglo XX plantea una serie de desafíos a futuro. Buena parte de ellos están referidos a las capacidades de las políticas estatales para consolidar, sostener y aun profundizar esta recomposición.

Las capacidades de gestión: lejos de referirse a la eficacia y eficiencia en posicionamientos abstractos o evaluados a partir de categorizaciones que proponen incorporar modelo de gestión “llave en mano”, nos proponen el desafío de construir y sostener modalidades de gestión estatal que se constituyan a partir de las experiencias prácticas y concretas que resultan adecuadas a la configuración de nuestras sociedades.

Las fórmulas institucionales exitosas en otras latitudes son exitosas para esos marcos

¹⁰ Dantas, Marcos (coord.) (2014). *Avances de los procesos de democratización de la comunicación en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

sociales, y no necesariamente constituirán una vía útil o eficaz para el Estado latinoamericano.

Los alcances del involucramiento estatal: las perspectivas clásicas han hecho hincapié en la existencia de una modalidad “mínima” de involucramiento –la propuesta por el neoliberalismo–, una modalidad del “Estado de bienestar” en donde la negociación se da entre este y las corporaciones económicas y sindicales, y el modelo desarrollista, donde el Estado “elige” vincularse en forma privilegiada con un grupo de empresas, relegando las políticas distribucionistas para un segundo momento.¹¹ Los desafíos del actual momento de reconfiguración democrático-popular en América Latina se corresponden con el desafío de generar marcos normativos de gestión estatal que puedan ajustarse tanto a individuos como a organizaciones formales e informales, que regulen/promocionen/desestimen determinadas actividades privadas –a través de mecanismos de inversión, impositivos y legislativos–, que articulen las políticas económicas nacionales con las regionales. La clave de los alcances del involucramiento estatal no se refiere, por lo tanto, a una conceptualización a priori sobre lo que el Estado “debe abarcar”, sino a lo que deba hacerse para garantizar crecimiento económico, sustentabilidad e integración /inclusión social.

El mito del tamaño: la cuestión de las dimensiones que el Estado debe adquirir es uno de los tópicos fundantes de las críticas neoconservadoras a la posibilidad de procesos democráticos inclusivos y un rol proactivo del Estado en ellos. Ha sido además el “sentido común” instalado en la destrucción estatal de las reformas neoliberales. Es uno de los desafíos centrales de cara a sostener y profundizar el rol del Estado en los parámetros que hemos señalado más arriba: la cuestión de las dimensiones no tiene que ver con el peso y número de los trabajadores de la gestión pública, sino con la

¹¹ Vilas, Carlos (2011). *Después del neoliberalismo. Estado y procesos políticos en América Latina*. Buenos Aires: UNLa.

densidad de esa gestión y su adecuación a los espacios concretos de articulación con el mundo de la economía y de la sociedad civil.

Las amenazas de la reconfiguración neoconservadora y la necesidad de una comunicación que dé cuenta de la relevancia de la recuperación estatal: uno de los desafíos más relevantes –y quizás menos explorado– es el de la necesidad de revertir “el sentido común” instalado sobre las falencias e incapacidades del Estado latinoamericano. Esta naturalización ha sido y es marcadamente funcional a estrategias de reformulación estatal que apuntan a la construcción de un marco social sin su intervención. Una política comunicacional masiva, participativa y popular resulta especial para reconfigurar el sentido dado al rol estatal y poner en agenda la relevancia de profundizar su accionar para alcanzar niveles progresivos de crecimiento económico a la vez que integración e inclusión social.

Conclusiones (provisionales)

Como puede concluirse a partir de los datos macro señalados arriba para los casos de Argentina, Bolivia y Ecuador, hay una correlación evidente entre las capacidades y profundidad de involucramiento del Estado latinoamericano en relación con su rol en la economía y la sociedad y la mejora en las condiciones económicas y sociolaborales.

En los tres casos señalados, la profundización de las políticas neoliberales “desde el Estado” condujo al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, a la profundización de la pérdida de soberanía económica y al debilitamiento/crisis/desaparición de un sistema político democrático.

La emergencia de gobiernos con una perspectiva de definiciones políticas que ponen a la estatalidad como eje para la reconversión de la matriz social neoliberal hacia una sociedad democrática, plural y con mayores niveles de inclusión/integración, ha modificado el mapa latinoamericano y coloca la cuestión del Estado como clave para el desarrollo de una sociedad más justa en el futuro cercano.

Bibliografía

Argumedo, Alcira (2004). *Los silencios y las voces en América Latina*. Buenos Aires: Colihue.

Boron, Atilio (2012). "Crisis capitalista y miseria del pensamiento económico burgués". En: *Batalla de ideas*, N° 3. Buenos Aires: CECS.

Cotarelo, María Celia (2008). "Las protestas contra el FMI y la política estadounidense en Argentina reciente (2000-2006)". En: López Maya, Margarita, Pilar Calveiro y Nicolás Iñigo Carrera. *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Cuello, Raúl (2004). "El neoliberalismo, una ideología contraria al equilibrio social". En: Boron, Atilio, Julio Gambina y Naúm Minsburg (comps.). *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Dantas, Marcos (coord.) (2014). *Avances de los procesos de democratización de la comunicación en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

De la Torre, Carlos (2008). "Protesta y Democracia en Ecuador: la caída de Lucio Gutiérrez". En: López Maya, Margarita, Pilar Calveiro y Nicolás Iñigo Carrera. *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

- Dos Santos, Theotonio (2003). *La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas*. Buenos Aires: Plaza & Janés.
- Ferrer, Aldo (2004). "La globalización, la crisis financiera y América Latina". En: Boron, Atilio, Julio Gambina y Naúm Minsburg (comps.). *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- García Delgado, Daniel (1998). *Estado-nación y globalización*. Buenos Aires: Ariel.
- Prada Alcoreza, Raúl (2008). "Genealogía de la multitud, seis años de luchas sociales en Bolivia". En: López Maya, Margarita, Pilar Calveiro y Nicolás Iñigo Carrera. *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Skidmore, Thomas y Peter Smith (2005). *Historia contemporánea de América Latina*. Barcelona: Crítica.
- Thwaites Rey, Mabel y José Castillo (2004). "Poder estatal y poder global: los límites de la lucha política". En: Boron, Atilio, Julio Gambina y Naúm Minsburg (comps.). *Tiempos violentos: neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Toussaint, Éric (2002). *Deuda externa en el Tercer Mundo. Las finanzas contra los pueblos*. Disponible en: http://www.cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a298.pdf.
- Vilas, Carlos (2011). *Después del neoliberalismo. Estado y procesos políticos en América Latina*. Buenos Aires: UNLa.
- Wallerstein, Immanuel (2006). *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*. Madrid: Siglo XXI.

América Latina y los procesos de integración en el siglo XXI ¿Integración para la inclusión o para el saqueo?

Por Fernando Esteche

Cuando estalla la crisis del modelo desarrollista cepalino (durante los años setenta y ochenta), con hiperinflación y endeudamiento elevadísimo, el Banco Mundial y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI)¹² condicionan los supuestos salvatajes financieros que ofrecen a través de mayor endeudamiento, imponiendo en cada país regímenes de ajustes y reformas estructurales que van desguzando el capital estatal, transfiriéndolo a empresas multinacionales.

Será la aplicación de los principios del Consenso de Washington, la retirada del Estado, el abandono de políticas públicas y la apertura económica.

Estas aperturas que diezman el acumulado de cada país se concretan de forma unilateral, reduciendo los aranceles, homologando la inversión extranjera y nacional, liberando los flujos financieros. Otra forma es mediante acuerdos comerciales entre países de la región y Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países industrializados y de desarrollo intermedio.

Esta mezcla de apertura económica y neoliberalismo da por resultado lo que se llamó “regionalismo abierto”, nunca demasiado conceptualizado pero con un resultado muy

¹² Tanto el FMI como el Banco Mundial son creados en el marco de la Conferencia Monetaria y Financiera de la ONU, conocida como Acuerdos de Bretton Woods (1944), donde se establece el dólar como moneda internacional de intercambio. Son instrumentos que expresan los intereses financieros norteamericanos.

contundente, aunque de poco vuelo histórico, que es desactivar los procesos de integración y subestimarlos. El regionalismo abierto impulsado por la propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dándole la espalda a los postulados de Prebisch, impulsa integraciones y acuerdos comerciales con cualquier parte del mundo, lo cual debilita los procesos de integración nuestroamericanos, de por sí débiles.

Ante un nuevo escenario mundial, Estados Unidos lanza la Iniciativa para las Américas y luego el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como nueva concepción panamericanista, que no deja de ser la misma política expansionista y en última instancia imperialista.

Entre 1986 y 1994 se lleva a cabo el proceso de negociaciones de la Ronda Uruguay, donde los países periféricos en condiciones de debilidad terminan consagrando una apertura en el sector de servicios y una mayor protección a las inversiones y a la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, nada logran respecto de condiciones de comercialización desfavorables producto de los subsidios a las exportaciones agrícolas que ponen los Estados Unidos para proteger a sus productores. Lo determinante de la Ronda Uruguay es que cualquier negociación bilateral e incluso los créditos de organismos como el Banco Mundial y el FMI quedan sujetos al cumplimiento de dichas pautas.

México, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA), se integra a la economía norteamericana. Los países de Centroamérica, mediante el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-RD/TLCCA-RD), siguen el mismo camino.

Los gobiernos neoliberales de Chile optan por diseñar su propia suerte, buscando alejarse de las políticas que apuntan a buscar el destino común nuestroamericano. Desde que abandona el Pacto Andino, se mantiene al margen de los distintos procesos

de integración. En 1990, como parte de la retirada de la dictadura pinochetista, desarrolla una fuerte ofensiva comercial mediante la firma de Acuerdos de Complementación Económica (ACE), en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con todos los países de América del Sur y México. Terminando el año 2000 en plenas negociaciones por incorporarse al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se anuncia la firma de un TLC con Estados Unidos, lo que es un giro muy fuerte en su política, que además luego profundiza firmando acuerdos comerciales de preferencias con prácticamente todos los países industrializados.

El Perú del reconvertido presidente Alan García también firma un TLC con los Estados Unidos, y lo sigue la Colombia de los sucesivos presidentes Uribe y Santos.

Plan Puebla Panamá

El Plan Puebla Panamá 2001 (PPP) se inscribe en las políticas económicas de rescate al modelo de crecimiento a partir del libre mercado de neto corte neoliberal. Es una idea discutida en diversos organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL), elaborada por el INCAE¹³ y la retomará el presidente Vicente Fox una vez en el gobierno de México, en pleno desarrollo del NAFTA y el CAFTA-RD:

Queremos empezar a construir grandes corredores de carreteras y ferrocarriles, de oleoductos y electroductos, puertos y aeropuertos, que conecten rápida y eficazmente todas las zonas de desarrollo de Panamá a México [...] para superar el enorme rezago

¹³ INCAE Bussines School es una institución creada en 1964 a expensas de la Administración Kennedy con la Universidad de Harvard para pensar políticas de desarrollo económico y comercial en América Latina. Se trata de un *think tank* de desarrollo de políticas de carácter imperialistas.

de la región e incorporarla plenamente a los corredores del comercio mundial.
(Presidente Fox al inaugurar el PPP el 12 de marzo de 2004)

Fox anuncia el PPP con el objetivo manifiesto de coordinar con el resto de Mesoamérica el combate contra la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios regionales, con el lema de “elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población para mejorar su calidad de vida”.

Es posible rastrear los elementos que inspiran el PPP en el documento *El sur también existe* de Dávila, Kessel y Levy (2000), en el que los autores analizan las condiciones de la Región Sur Sudeste mexicana (RSSE), con bajos costos salariales, abundantes recursos hidrológicos y energéticos, deficientes medios de transporte por escasa infraestructura, lejanía de los grandes centros de consumo, y en el contexto de economía abierta.

El Plan contempla nueve estados del sur-sudeste mexicanos (Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y los siete países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá). Los tres principales rangos de desarrollo son: proyectos de infraestructura, producción (maquiladoras y agroindustria) y seguridad.

El Documento Base del PPP dice que uno de los “puntos fuertes” de la región es su mano de obra abundante, con costos competitivos a nivel mundial. La “marcha al sur” será la propuesta de instalación de maquilas.¹⁴ Las maquiladoras son el área de mayor crecimiento en Mesoamérica.

¹⁴ La maquila toma el nombre del Medioevo, de “moler harina en molino ajeno”. Es un sistema de producción de arancel cero donde se importan los insumos y el producto final vuelve al país de origen de esos insumos. Sólo se utiliza la maquila como espacio de producción, pero no de comercialización. Es industria deslocalizada, pero que mantiene marca de origen.

Las rebeliones de Atenco y Oaxaca (2006) serán importantes escollos para la concreción de dicho plan, el cual podríamos definir como la dimensión centroamericana de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Hoy en día, en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que da origen al PPP, el plan pasa a denominarse Proyecto Mesoamérica e incorpora un área de Colombia.

Plan Colombia

El Plan Colombia es la dimensión militar de la recolonización imperial. El Estado colombiano es, con Israel, el que más “ayuda” militar recibe por parte de Estados Unidos en toda Latinoamérica, y el principal receptor del mundo de dicha “ayuda”.

En octubre de 1999, en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell presentan la propuesta del Plan Colombia, concebido durante las presidencias de Bill Clinton en Estados Unidos y Andrés Pastrana en Colombia.

Serán numerosos los autores y dirigentes populares -los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, entre otros- que denuncien este plan como la excusa norteamericana para una recolonización.

Colombia, además de ser una de las puertas de la Amazonia, concentra gran parte de la riqueza en acuíferos, biodiversidad y reservas minerales y energéticas. Pero además está concebida como un “Estado gendarme” de eventual “contención” de la Venezuela bolivariana y la autodeterminación nuestroamericana. Es indudablemente la dimensión militar de las estrategias norteamericanas para la región, contando en principio con siete bases militares aéreas, navales y terrestres de traslado rápido, que, con el pretexto de la guerra contra el narcoterrorismo, se asientan estratégicamente en

nuestro continente. Más de diez mil militares norteamericanos y asesoramiento policial, legislativo y judicial completan un círculo de profunda injerencia en el Estado colombiano.

El método de la fumigación de supuestas plantaciones ilegales con *Fusarium Oxysporum*, elemento denunciado como arma biológica por varios científicos, junto a la utilización de herbicidas a base de glifosato, daña irreversiblemente los ecosistemas de la región de la Orinoquía y la Amazonia, provocando pasivos ambientales y desolación, además de innumerables enfermedades a la población.

Desde agosto de 2000, cuando se instrumenta oficialmente el Plan Colombia, Estados Unidos gastó cerca de 5.000 millones de dólares en operaciones y equipamiento militar y policial.

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

El 31 de agosto y el 1º de septiembre de 2000 se realiza en Brasilia una reunión de presidentes sudamericanos, en la que los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentan la propuesta “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica”, aprobada por los allí reunidos, quienes se enteran ahí mismo de dicha propuesta. Nace entonces la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un ambicioso plan para la ejecución de proyectos estructurales y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales a fin de facilitar el comercio regional y global, comercio que por entonces y hasta hoy está lejos de desarrollarse en los marcos de integración real sudamericanos,

hegemonizado por la relación desigual, subordinada y dependiente con los Estados Unidos, principalmente, y otras potencias centrales.

Juntos, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, 1994), el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA, 1994), el Plan Colombia (1999) y el Plan Puebla Panamá (PPP, 2001) representan los elementos estructurantes de la política hegemónica de Estados Unidos para las Américas y el Caribe.

La iniciativa representa la etapa final y culminante de las reformas neoliberales aplicadas en la región.

El proyecto IIRSA prevé desarrollar en un plazo de diez años un proceso multisectorial que pretende, construyendo o incorporando estructuras existentes, integrar sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones que atraviesen Nuestramérica. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una red de comunicación por las vías terrestres, aéreas y fluviales, una red de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre lo más destacado.

Como afirman los investigadores Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,¹⁵ se procura configurar un gran tejido formado por doce ejes que denominan corredores de integración y desarrollo, donde se concentrarán las inversiones, conectando los principales mercados del mundo con las cadenas productivas, garantizando el libre comercio continental que asegure las inversiones y los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales y, a la vez, ayude a paliar el crónico déficit financiero y comercial de los Estados Unidos. Estos ejes fueron pensados para aceitar el transporte de mercaderías, particularmente desde el Atlántico al Pacífico, donde se concentra el mayor tráfico entre los Estados Unidos y

¹⁵ <http://www.geopolitica.ws/home.php>.

países como China, India o Japón, para posibilitar el aprovechamiento privado de las grandes reservas de bienes naturales del continente y usufructuar la enorme biodiversidad existente en la región –abastecedora de uno de los negocios más promisorios para el futuro de las corporaciones transnacionales: la biotecnología–.

Son muchos los autores que definen a la IIRSA como un proyecto de recolonización – Ceceña, Aguilar y Spedale, entre otros–. Para poder llevar adelante semejante megaproyecto, es necesario remover “barreras” físicas, normativas jurídicas y consensos sociales y culturales. Esta es justamente una de las batallas que más conmueven a la Bolivia plurinacional y multicultural de Evo Morales al iniciar trabajos sin contemplar las opiniones de los pueblos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011.

En el Seminario Subregional organizado por el Comité de Coordinación Técnica de la IIRSA, realizado en 2003 en Lima, Perú, se definen tres objetivos esenciales: apoyar la integración de los mercados para mejorar el comercio intrarregional, apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar competitividad en los grandes mercados mundiales, y reducir el “costo sudamericano” a través de la creación de una plataforma logística vertebrada e inserta en la economía global.

El territorio nuestroamericano ha sido subdividido desde esta perspectiva de acuerdo con sus virtudes económicas y estratégicas para el mejor desarrollo de prácticas que favorecen las políticas de carácter imperialista. Se han definido diez ejes, interconectados en su mayor parte, cada uno de los cuales comprende a varios países:

- Eje Andino: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
- Eje Andino del Sur: Chile, Argentina y Bolivia.
- Eje del Amazonas: Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
- Eje Interoceánico Central: Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

- Eje Interoceánico Capricornio: Antofagasta (Chile), Jujuy (Argentina), Asunción (Paraguay) y Porto Alegre (Brasil).
- Eje del Escudo Guayanés: Venezuela, Brasil, Surinam y Guyana.
- Eje MERCOSUR-Chile: Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.
- Eje del Sur: Talcahuano y Concepción (Chile), Neuquén y Bahía Blanca (Argentina).
- Eje Amazónico del Sur: Perú, Brasil y Bolivia.
- Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná: Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Actualmente se encuentran en estudio la Hidrovía Paraná-Paraguay y un megaproyecto para unir las cuencas del río Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata a través de la interconexión de diecisiete ríos menores, lo que permitiría el transporte fluvial entre el Caribe y la región rioplatense.

Por otro lado, para identificar los obstáculos de tipo normativo e institucional que el proyecto podría encontrar en los distintos países, se definieron siete procesos sectoriales de integración: mercados energéticos regionales, sistemas operativos de transporte aéreo, marítimo y multimodal, promoción de las tecnologías de información y telecomunicaciones, facilitación de los pasos de frontera y modalidades de financiamiento.

Las inversiones planificadas para la primera generación de actividades propuestas rondan los 30.000 millones de dólares, cantidad que los países latinoamericanos propusieron a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), además de importantes aportes del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA. El ALCA constituye una estructura jurídico-administrativa, mientras que la IIRSA representa una infraestructura necesaria

para desplegar y consolidar la liberalización comercial. Al mismo tiempo, ambos aparecen ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla Panamá. Ciertamente no puede comprenderse sino como una recolonización.

La IIRSA tiene la particularidad de ser un tipo de integración nacida en el sur, gestionada en gran medida por las burguesías locales transnacionalizadas. El énfasis en las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las exportaciones de materias primas y, en general, bienes comunes mercantilizados.

El desarrollo económico que supone este proyecto, de no modificarse la matriz productiva y las relaciones de propiedad y distributivas, genera fuertes dudas con respecto a su impacto en las situaciones de pobreza y desigualdad, la posibilidad que aumente la concentración de la riqueza a escala local y global y los riesgos e impactos ambientales.

Entre estos graves riesgos aparece la posibilidad cierta de un mayor endeudamiento externo, la depredación de los bienes comunes y la posible desarticulación de las economías regionales y las comunidades.

En la última década, en todo el continente ha avanzado un amplio debate y lucha contra el ALCA y los TLC, en ocasiones victoriosa. Pero los proyectos vinculados a la IIRSA todavía están cubiertos de un manto de silencio. Los gobiernos tienen comportamientos contradictorios en esto y justamente constituye una de las persistencias neoliberales fuertes.

La IIRSA, a través de la creación de esta enorme red de infraestructura, expresa la posibilidad latente de conseguir para las políticas expansivas de Estados Unidos la imposición de los mismos objetivos del ALCA, ya sin ese nombre. Existe la posibilidad

de que en pocas décadas se consume este nuevo proyecto imperial que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes.

Finalmente, detrás de la IIRSA existe también una planificación de control militar regional por parte de Estados Unidos. Para ello, desde hace décadas, Norteamérica ha desplegado su maquinaria bélica por todo el continente. Actualmente existen bases militares en distintos países. Recientemente, ese énfasis en lo militar ha retornado. Luego del cierre de la legendaria base de Manta, en Ecuador, por parte de la voluntad del presidente Rafael Correa, han avanzado en la instalación de siete bases en Colombia. Se garantizan así el acceso a zonas privilegiadas por sus dotaciones materiales, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes.

Área de Libre Comercio de las Américas

El ALCA, con toda su parafernalia publicitaria y los espejitos de colores de las supuestas ventajas del libre comercio, no persigue otra cosa que un anexionismo de nuevo tipo de toda nuestra América, que desde la perspectiva norteamericana sigue siendo “su” América. Es claro que el intercambio desigual solamente favorece al más poderoso, algo que los paladines de los TLC o del ALCA se encargan de ocultar. En definitiva, no es más que el viejo sueño de las políticas norteamericanas de lograr una Unión Aduanera -propuesta en 1881 por Estados Unidos- que coloque a todo el continente bajo la dependencia de su economía.

Muestra y ejemplo de ello se puede apreciar en el Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, donde, tras la fachada de una aparente ayuda, el resultado concreto es la

“recolonización” de estos territorios instalando bases militares y condicionando sus políticas internas y exteriores, destacando la condición de países ricos en bienes comunes con una exuberante biodiversidad, además de enormes reservas de gas y petróleo.

El ALCA se beneficia a través del libre comercio, de los problemas estructurales de los países subdesarrollados mediante el desequilibrio externo y el deterioro de la relación de intercambio que sufren estos países.

El Área de Libre Comercio de América es la intención de un tratado de integración económica entre Estados Unidos y 34 países de América Latina –con la excepción de Cuba– como extensión de los ya existentes TLC. Si el ALCA se constituye, sería el mayor bloque económico del planeta, con un producto bruto combinado de 11 billones de dólares, el 40% de la producción mundial y una población de 800 millones de personas.

El Gral. Colin Powell, secretario de Estado durante la presidencia de Bush Jr., al asumir el cargo en 2003 señaló que el objetivo era garantizarle a las empresas norteamericanas el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculos de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio. Expresado sin medias tintas, es un proyecto anexionista.

El ALCA sería el “gran final”, el “broche de oro” de las reformas estructurales que empezaron a imponerse sistemáticamente en América Latina desde los setenta. Constataría el triunfo del neoliberalismo: libre movimiento de capitales, desregulación, ajuste y austeridad fiscal, libre comercio y privatización.

El ALCA fortalecería la competitividad de las empresas de servicios, industrias y bancos de Estados Unidos a través de acceso a materias primas y mano de obra barata. Es una

estrategia económica de integración neocolonial combinada de las élites norteamericanas y sus corporaciones con las élites latinoamericanas.

El fracaso neoliberal y el resurgimiento nuestroamericano

El desarrollo del neoliberalismo, aún en su postrer fracaso, deja como resultado estragos en las estructuras sociales y en las economías de Nuestramérica. La llamada “crisis mundial”, que se manifiesta en distintos tiempos y estalla en lugares disímiles, coloca a nuestra región en una situación de recesión económica y productiva y de pobreza e indigencia dramáticas, además de acentuar la desigualdad.

Después de la crisis de la deuda externa en 1982,¹⁶ la experiencia neoliberal y los desmoronamientos financieros globales,¹⁷ asoman expresiones populares que plantean otro modelo y otro destino.

Las rebeliones en Ecuador de 1997, 2000 y 2005, la insurrección de Bolivia con la guerra del agua en 2003 y 2005, la rebelión peruana que fuerza la salida de Fujimori de 2000 y el argentinazo de 2001, entre tantas otras batallas que encarnan nuestros pueblos,

¹⁶ Para mayor desarrollo de este tema, véase Castro, Fidel (1985). *La deuda externa*. Cuba: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

¹⁷ El crac bursátil de Wall Street (1987), las crisis de las cajas de ahorro estadounidenses (1989), el crac de la burbuja inmobiliaria y financiera en Japón (1990), las crisis periféricas de México o “Efecto Tequila” (1994), el “Efecto Arroz” del sudeste asiático (1997), el “Efecto Vodka” en Rusia (1998) y el “Efecto Caipirinha” en Brasil (1999). A partir del nuevo siglo, el derrumbe de las “punto.com” o “burbuja.com” (2000), las crisis en Turquía y “el argentinazo” (2001), la quiebras de Enron y WorldCom (2001-2002). Y la crisis de las *subprime* (2007), con el ciclo de quiebras de bancos y entidades financieras desde 2008: Bear Stearns, Lehman Brothers y las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, el salvataje de la aseguradora AIG, o la escisión del Citigroup, así como otras quiebras o rescates durante 2009, entre ellas la de BankUnited FSB.

terminan derrotando las expresiones que en la política expresaba el modelo neoliberal.¹⁸

La resistencia al neoliberalismo se expresa de diferentes maneras, con multiplicidad de métodos de lucha y variada efectividad, y así es que enfrentamos a la postre desiguales condiciones para articular proyectos populares en cada uno de nuestros países. Sin la comprensión de esta situación, es imposible entender los condicionantes, las potencialidades y los límites de cada proceso.

Cada pueblo va construyendo a nivel de gobiernos nuevas expresiones que dan cuenta del posneoliberalismo. Así, Hugo Chávez en Venezuela, Luis Ignacio "Lula" da Silva en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el matrimonio Kirchner en Argentina, el sandinismo en Nicaragua y el FMLN en El Salvador, entre otros, sumando la persistencia de Cuba –oxigenada ahora con el nuevo mapa político nuestroamericano–, son todas expresiones de fuerte cuestionamiento al neoliberalismo.

De todos modos, hay aún persistencias neoliberales duras, en sus marcos jurídicos administrativos, en sus modelos productivos, etcétera, pero que van planteando una independencia y la necesidad de fortalecer la integración regional como reaseguro de supervivencia ante la crisis mundial.

Es posible enmarcar esta última cuestión –la de fortalecer la integración regional– como tercera ola integracionista con un definido y marcado perfil autónomo y de búsqueda de presentar la región como uno de los actores independientes del tablero mundial, que además comprende el escenario nuestroamericano como propio y con intenciones de despojarse de cualquier tipo de injerencia, incluso –y especialmente– de la de América del Norte.

¹⁸ AA.VV. (2011). *Que se vayan todos*. Buenos Aires: Cooperativa El río suena.

El alba de los pueblos

Con la impronta y efectividad regular alcanzada por el MERCOSUR y la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que además por entonces están obstaculizando un acuerdo bilateral entre los espacios, se va preparando hacia 2000 la posibilidad de un acuerdo general sudamericano.

Si bien vienen desarrollándose las Cumbres Iberoamericanas –que integran también a Portugal y España– y las Cumbres de las Américas –que integran a Estados Unidos y Canadá–, esta iniciativa de la diplomacia de Itamaraty durante la presidencia de Henrique Cardoso recupera la trayectoria del Grupo de Río y convoca solamente a los presidentes sudamericanos, los cuales se reúnen en Brasilia en el año 2000. Dicha cumbre será el nacimiento de la IIRSA, fogueada por los sectores empresariales exportadores en época neoliberal. Pero además aporta un elemento importante desde la conceptualización de las relaciones internacionales, planteando una unidad “sudamericana”, abandonando el “latinoamericanismo” –cuya genealogía explicamos bien temprano en este libro–.

Esta “sudamericanización” de la integración, que luego será superada con la experiencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), llega en momentos en los que México y el resto de América Central avanzan en el TLC con una integración suramericana, para poder plantear, a partir de un bloque consolidado, una articulación con el resto de América. Incluso es una opción para países que por entonces piensan articularse a la propuesta del ALCA pero entienden la necesidad de hacerlo desde una posición de mayor poder. La Cumbre de Brasilia expresa el

momento histórico en el que se realiza, en el que la búsqueda es por mejores posiciones para articularse al proceso de globalización y libre comercio.

La continuidad de la Cumbre de Brasilia es la Cumbre de Guayaquil (2002), en pleno proceso de desmoronamiento neoliberal con las caídas de Hugo Bánzer Suárez en Bolivia, de Alberto Fujimori en Perú y de Fernando de la Rúa en Argentina.

Se desarrolla la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se esperan mejores resultados que en la Ronda Uruguay, fundamentalmente, regular los subsidios a las importaciones de las economías poderosas. Es una cumbre “bisagra” entre un tiempo histórico que agoniza y una nueva impronta nuestroamericana que asoma.

El presidente de Brasil Lula da Silva por el MERCOSUR y el presidente de Perú Alejandro Toledo por la CAN, son quienes más firmemente defienden durante la tercera cumbre (Cuzco, 2004) la conformación de una Comunidad de Naciones. La ausencia de los demás socios del MERCOSUR es señal de la evidente intención de liderazgo regional por parte de Brasil. Si bien las propuestas concretas de esta cumbre son prácticamente nulas, la de crear una Confederación de Naciones, observada con cautela y –en algunos casos– desinterés por los Estados sudamericanos, provoca un impacto político que le da vida propia a la iniciativa. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) nacida en Cuzco dará lugar inmediatamente a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

La CSN se convierte en un nuevo “punto de partida” de la integración de América del Sur, y las cumbres anteriores pasan al lugar de la prehistoria. Así, la cumbre de Brasil en 2005 (IV Cumbre Suramericana) pasará a ser la Primera Cumbre de la CSN, y la Cumbre de Cochabamba de 2006 será la segunda.

La IIRSA y el ALCA siguen sobrevolando con intenciones integracionistas de otro tipo.

La integración de infraestructuras y el libre comercio serán objetivos planteados por

distintos actores que además vienen obstaculizando sus propios TLC con Estados Unidos. Lejos de ser un escollo en su carrera hacia el libre comercio continental, Estados Unidos ve en la CSN un vector de sus propias intenciones.

Es el presidente Hugo Chávez quien, en pleno acto de clausura de la Cumbre de Brasil, señala el talón de Aquiles de la nueva integración de la CSN denunciando a viva voz que se están “repitiendo esquemas fracasados” al insistir en hacer declaraciones generales y acordar pocas medidas concretas. La declaración final de Brasil contempla la intención de crear un área de libre comercio de América del Sur atendiendo las asimetrías económicas para nivelarlas.

El espíritu de Bolívar, Sucre y San Martín alentó la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones. Lo suramericano empieza a comprenderse como identidad, lo mismo que lo nuestroamericano, y entonces no sólo los libertadores animan a los pueblos, sino también los líderes de los pueblos originarios, como Túpac Katari, Túpac Amaru, Guaycurú y Apiaguaiki Tumpa, que hicieron de su rebelión una afirmación identitaria de dignidad de los oprimidos.

Para comprender todo el proceso es necesario reseñar la Cumbre de las Américas de 2005 en Mar del Plata, Argentina, donde los países del MERCOSUR impugnan varios de los borradores que lleva bajo el brazo el presidente norteamericano George Bush para concretar el ALCA. Especialmente, rechazan medidas como la forma por la cual se pretende abastecer a los Estados o los subsidios agrícolas que mantiene Estados Unidos. El gobierno de Venezuela tiene la voz cantante para frenar el neocolonialismo estadounidense. La cumbre muestra un nuevo clima en el que varios países nuestroamericanos rechazan la ortodoxia librecambista norteamericana.

Ya en abril de 2007, en la cumbre de isla de Margarita sobre la cuestión energética, se había acordado avanzar en la construcción de la Unión Suramericana. El Tratado

Constitutivo de la UNASUR como organismo regional integrado por doce Estados miembros –Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela– se firma en Brasilia en 2008. La UNASUR desconocerá los territorios de ultramar de las potencias europeas en condiciones de colonialismo, como Malvinas o Guyana ocupada por Francia. El objetivo declarado del organismo es:

construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. (Declaración de principios de la UNASUR)

El Tratado Constitutivo es presentado y leído por el presidente Evo Morales, que sostiene:

En Cochabamba (2006) pusimos la piedra fundamental para la integración de nuestros pueblos, ahora en Brasilia 2008, con el Tratado Constitutivo, estamos levantando los cimientos de la Unión de Naciones del Sur [...] y los presidentes nos convertimos en obreros y albañiles para construir la unidad Sudamericana.

Desde el punto de vista organizacional, la sede administrativa estará ubicada en Quito (Ecuador), pero la del Parlamento Sudamericano estará en Cochabamba (Bolivia). Los

órganos de la UNASUR son el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados y la Secretaría General. Podrán convocarse y conformarse reuniones ministeriales sectoriales, consejos de nivel ministerial, grupos de trabajo y otras instancias institucionales que se requieran. La Secretaría General es el órgano encargado de llevar adelante los mandatos que le confieren los Consejos de Jefas y Jefes de Estado, y ejerce la representación del organismo. El primer secretario general es el argentino Néstor Kirchner, hasta su muerte. Actualmente la presidencia pro tempore la ejerce Mauricio Macri por la Argentina, y no se ha nombrado secretario general luego del fin del mandato del colombiano Ernesto Samper.

También hay una Presidencia Pro Tempore que se ejerce anualmente, por orden alfabético de los Estados miembros, y que es la encargada de organizar la agenda y las reuniones de los Consejos.

El presidente Lula da Silva propone la creación de un Consejo Sudamericano de Defensa, idea aceptada por todas las naciones, con la excepción de Colombia. Sobre la experiencia común de las nuevas hipótesis de conflicto de países como Argentina y Brasil, donde se atiende a preservar y defender las fuentes energéticas y de bienes comunes ante agresiones extracontinentales, este Consejo cobrará singular importancia, conteniendo el avance del Plan Colombia en el Continente. En la actualidad, este proyecto ha quedado suspendido, debido a los cambios en las orientaciones políticas de las presidencias de Brasil, Argentina y Paraguay.

La región que integra la UNASUR posee 280 millones de habitantes, cuatro idiomas reconocidos oficialmente (español, portugués, inglés y neerlandés), otros tantos propios de los pueblos originarios (quechua, guaraní, aymara, ñahuatí y lenguas

mayas, entre otras)¹⁹. Se encuentra entre las primeras en producción de alimentos y segunda en producción de energía, reservas de agua dulce (Acuífero Guaraní), de biodiversidad (la Amazonia), y vastos yacimientos de hidrocarburos (Orinoco, Tarija, Camisea, Santos). Como contrapartida, la mitad de la población se halla bajo la línea de la pobreza y no se ha podido superar la dependencia financiera y tecnológica, según datos aportados por la Agencia Periodística del Mercosur de mayo 2008.

Algunas de las iniciativas de UNASUR son:

La Carretera Interoceánica, que vinculará Perú con Brasil a través de Bolivia y que integra los tres países a las cuencas del Pacífico y el Atlántico.

El proyecto de un anillo energético que una Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en la provisión de gas peruano y boliviano.

El polducto binacional entre Colombia y Venezuela.

La libre circulación de personas sin visa por tres meses en toda la región.

Los capítulos más auspiciosos del organismo son aquellos dramáticos momentos en que tuvo que reunirse extraordinariamente para responder con firmeza y defender los procesos democráticos de naciones miembro. En un inevitable contraste que nos vemos obligados a hacer frente a situaciones similares –las respuestas desde la desidia o la complicidad de la OEA, entonces único organismo internacional americano–, la UNASUR expone un firme compromiso y voluntad de sostenimiento de la soberanía de los pueblos:

La crisis de Bolivia en 2008 y la pretensión de secesión por parte de la llamada región de la Media Luna Blanca, situación provocada por la élite terrateniente y el embajador norteamericano Philip Goldberg, llegado de Kosovo a La Paz y expulsado por el gobierno de Evo Morales ante las evidencias de su participación en la conspiración –

¹⁹ Bolivia, Paraguay, Guatemala y otros tantos pueblos reconocen como lenguas oficiales también a las mayoritarias de los pueblos originarios. El guaraní del sur del continente es lengua oficial del MERCOSUR.

situación en la cual se desarrolla la masacre de Pando-, fue resuelta por una reunión de emergencia de presidentes de UNASUR en Santiago de Chile, donde todos los países miembros acordaron solidarizarse con el gobierno constitucional de Morales.

En agosto de 2009, la reunión ordinaria de jefes de Estado condenará enérgicamente el golpe en Honduras y no reconocerá al gobierno de facto ni ninguna medida emanada de este, como la convocatoria a elecciones.

Ante la tragedia del terremoto haitiano en 2010, crea un fondo solidario de asistencia inmediata con el país caribeño.

En el año 2010, Ecuador sufre un intento de golpe institucional. Los países de UNASUR convocan a una reunión urgente en Buenos Aires ese mismo día, declarándose un bloqueo total de las fronteras ecuatorianas, y acuerdan no reconocer ningún gobierno que no sea el democrático y la expulsión del país de la organización en caso de quebrar la continuidad democrática.

Ante la militarización colonialista británica del Atlántico Sur, la UNASUR apoya firmemente el reclamo de soberanía argentino y rechaza comerciar con barcos de bandera ilegal -navíos registrados como de Falkland en territorio argentino ocupado-.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe

Los antecedentes de la CELAC podemos rastrearlos en el Grupo de Contadora, luego Grupo de Río. Es un organismo de integración continental que abrevia de la Conferencia de América Latina y el Caribe (CALC), que promueve la integración de los países nuestroamericanos excluyendo el norte del continente. Su creación fue acordada

en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, convocada por el Grupo de Río y la CALC como un espacio de concertación regional. Dicha cumbre se llevó a cabo en la ciudad de Cancún (México) en febrero de 2010, con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural de América Latina y del Caribe y con dos imperativos fundamentales: la democracia y el desarrollo. La primera cumbre de mandatarios donde la CELAC se presentó como mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración se realizó en Venezuela en diciembre de 2011, reuniendo a 33 países fundadores.

En la Declaración de Cancún, los jefes y jefas de Estado habían acordado, entre otras cuestiones:

Construir un espacio común con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural de nuestra región y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de unidad, democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.

Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río y los acuerdos de la CALC, así como en los mecanismos y agrupaciones de integración, cooperación y concertación ya existentes, mediante un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su conjunto.

El Grupo de Río (G-Río), mecanismo permanente de consulta y concertación política de América Latina y el Caribe, fue creado en Río de Janeiro (Brasil) el 18 de diciembre de 1986 para dar continuidad a los esfuerzos del Grupo de Contadora (México, Colombia,

Venezuela y Panamá) y del Grupo de Apoyo a Contadora (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay). También se lo denominó Grupo de los Ocho.

1986	Colombia, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay
1990	Bolivia, Ecuador, Chile y Paraguay
2000	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana
2005	Belice
2008	Cuba, Haití y Guyana
2009	Surinam y Jamaica

La primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo tuvo lugar en Salvador de Bahía (Brasil) los días 16 y 17 de diciembre de 2008 y estableció como propósito avanzar en la articulación de los procesos de integración e impulsar y fortalecer el desarrollo de los países. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) fue creada en Caracas (República Bolivariana de Venezuela) en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y de la XXII Cumbre del Grupo de Río, reunidas los días 2 y 3 de diciembre de 2011. El acto de creación se llevó a cabo mediante la firma de la Declaración de Caracas.

En dicha declaración se reconoce que la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituyen una aspiración fundamental de los pueblos y una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se le presentan a la región. Que existe la necesidad de promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes en reuniones y

conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras regiones y países. Y que los avances logrados en los procesos de integración regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo largo de las últimas décadas constituyen un sólido cimiento sobre el cual se asienta esta comunidad de Estados.

El camino trazado por los libertadores de América Latina y el Caribe hace más de doscientos años es el precedente ineludible de la unidad nuestroamericana. Se menciona como fuente de inspiración su obra y particularmente el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), al cual se reconoce como acto fundacional de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña. Asimismo, se recalca la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las luchas independentistas y se reconocen sus aportes morales, políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y en la construcción de nuestras naciones y procesos democráticos, y el papel histórico de los países de la Comunidad Caribeña (CARICOM) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en Latinoamérica y el Caribe.

La declaración fundacional manifestará que la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez para reafirmar la identidad de América Latina y el Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad.

Es intención que la CELAC se convierta en un espacio que reivindique el derecho a la existencia, preservación y convivencia de todas las culturas, razas y etnias que habitan los países de la región, así como el carácter multicultural de nuestros pueblos y

plurinacional de algunos de nuestros países, en especial de las comunidades originarias. Se establece que los procesos de diálogo, intercambio y negociación política que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando en cuenta los siguientes valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación a la soberanía y a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia.

El gran desafío de la CELAC, atendiendo a la heterogeneidad política que viste el continente y a la diversidad de intenciones que las políticas exteriores de cada gobierno tienen, será superar con grandeza esta mixtura para poder amasar una verdadera unidad nuestroamericana capaz de superar la funcionalidad pronorteamericana de la OEA y poner el nuevo organismo al servicio de los intereses de los pueblos de Nuestra América -una de las herramientas de autorregulación lograda por los sectores más conservadores es la imposición de que los acuerdos deben alcanzarse por unanimidad, intentando con esto contener el desaforo de los gobiernos más antiimperialistas-. Cada gobierno atenderá a sus propias expectativas.

El canciller chileno Alfredo Moreno, representativo de las élites pronorteamericanas, expresó con absoluta claridad la postura del imperialismo cuando dijo que “la CELAC será un foro y no una organización, que no tendrá sede, secretariado, burocracia ni nada de eso”. Para Moreno, la CELAC no será más que una sucesión de cumbres presidenciales. Pero, en línea con el programa bolivariano del Congreso Anfictiónico y con los anhelos de Artigas, San Martín, Sucre, Martí, Morazán, Sandino y los patriotas latinoamericanos y caribeños, hay otro proyecto para la CELAC. El proyecto que hace medio siglo fue brillantemente sintetizado en la Segunda Declaración de La Habana,

impulsada por Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara. La disputa entre los dos proyectos será inevitable, y las circunstancias históricas –profundización de la crisis general del capitalismo, intervencionismo norteamericano en la región, maduración de la conciencia política de nuestros pueblos, etcétera– irán moviendo el fiel de la balanza (Boron, 2010).

Bibliografía

- Arias, Marta y José María Vera (2006). *El FMI y Banco Mundial ¿Una Ayuda para los países pobres?* Disponible en: <http://www.fespinal.com/espinal/castellano/visua/es112.htm>.
- Boron, Atilio (2003). “Prefacio a la segunda edición en lengua castellana”. En: Sader, Emir y Pablo Gentili. *La trama del neoliberalismo*. La Habana: CLACSO.
- (2011). *CELAC: dos proyectos en pugna*. Disponible en: <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=141718>.
- Calvo, Guillermo (2001). “Enseñanzas de la globalización financiera”. Disponible en: http://www.iadb.org/res/centralbanks/publications/cbm49_481.pdf.
- Castro, Fidel (1984). *La deuda es impagable e incobrable*. La Habana: Editora Política.
- (1986). *Discurso pronunciado en la VIII Conferencia del Movimiento de Países No Alineados*. Harare, Zimbabwe, 2 de septiembre. Disponible en: www.cubanoal.cu/antecedentes/PDF/8_harare%201986.pdf.
- Coburn, Christina (2008). *Deuda del Tercer Mundo: el asesino silencioso*. Disponible en: <http://www.atal.org>.

Fajnzylber, Fernando (1992). "Industrialización en América Latina. De la 'caja negra' al 'casillero vacío'. En: *Nueva Sociedad*, N° 118. Disponible en: http://www.nuevasoc.org.ve/upload/articulos/2086_1.pdf.

Ferrer, Aldo (1999). *La Globalización, la crisis financiera y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Fiol, Ana (2002). "El ALCA y la integración imperialista". Disponible en: <http://www.voltairenet.org/El-ALCA-y-la.integracion>.

Martínez, Osvaldo (2002). *¿Qué es el ALCA?* Caracas: La Burbuja Editorial.

-- (2003). *¿Por qué no al ALCA? Razones para oponerse al ALCA*. Disponible en: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Comercio_Biopirateria_y_Derechos_de_Propiedad_Intelectual/Razones_para oponerse_al_ALCA_por_Osvaldo_Martinez-.

Moreno Cabeza, Ana (2003). *ALCA acuerdo entre el tiburón y las sardinas. Perspectiva regional latinoamericana: Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)*. Caracas: La Burbuja Editorial.

Muchnik, Daniel (1994). "La Argentina se apoya en el campo; el Brasil en la industria". En: *Clarín*, 21 de diciembre.

Naredo, José Manuel (2003). "Claves de la globalización financiera y de la presente crisis internacional". Disponible en: <https://polis.revues.org/7082>.

Pichs Madruga, Ramón (2003). *La energía y el ALCA. Las dimensiones energéticas y ambientales en las negociaciones del ALCA*. Caracas: La Burbuja Editorial.

Pizarro, Roberto (2008). "El difícil camino de la integración regional". En: *Nueva Sociedad*, N° 214. Disponible en: <http://nuso.org/articulo/el-dificil-camino-de-la-integracion-regional/>.

Prieto Rozos, Alberto (2005). *Ideología, economía y política*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Rodríguez Asien, Ernesché (2006). "Algunas consideraciones de la integración Latinoamericana". En: *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, N° 72. Disponible en: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/oel/>.

Romero, Alberto (2002). "Reflexiones sobre la globalización". Disponible en: <http://www.rcci.net/globalizacion/2002/fg239.zip>.

Sitio oficial del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Disponible en: http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp.

Sojo, Carlos (2002). *Desarrollo social en América Latina. Temas y desafíos para las políticas públicas*. Costa Rica: FLACSO.

Toussaint, Éric (1989). "Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX". Disponible en: http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=166.

Zardoya, Rubén y otros (1998). "Transnacionalización y desnacionalización". Disponible en: <https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/06/transnacionalizacic3b3n-y-desnacionalizacic3b3n.pdf>.